

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PAMPLONA**  
**TRASLADO EXCEPCIONES DE MERITO**

RADICADO	CLASE DE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO
2022-00195	ORDINARIO LABORAL	LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS – PORVENIR - SA, ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS – PROTECCIÓN – y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

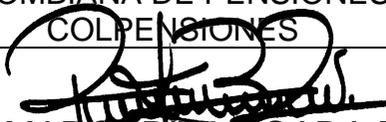
Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 110 del CGP en concordancia con el inciso 3 y 4 del artículo 9 de la ley 2213 de 2022, se fija el presente aviso en la página web de la Rama Judicial, en el micrositio de este despacho por el término legal de un (1) día, hoy catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023), a las 8:00 a.m.



ROSA MARGARITA BOADA RIVERA  
Secretaria

En obediencia a lo consagrado en el artículo 370 del C.G.P por remisión del art. 145 del C.P.L y, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, se mantiene el presente traslado virtual en línea para consulta permanente a los interesados, especialmente a disposición de la parte contraria.

CLASE DE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	TERMINO	INICIAN	VENCEN
ORDINARIO LABORAL	LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS – PORVENIR - SA, ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS – PROTECCIÓN – y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES	CINCO (5) DIAS	Junio 15 de 2023	Junio 22 de 2023



ROSA MARGARITA BOADA RIVERA  
Secretaria

## CONTESTACIÓN 2022-195 LUIS ANOTNIO RIZO QUINTANA VS PROTECCIÓN

MATEO TRUJILLO URZOLA <mateotrujillo@legal-colombia.com>

Mar 14/03/2023 14:06

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - N. De Santander - Pamplona <j01cctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: DOC.CARLOSENRIQUEVERA@HOTMAIL.COM <DOC.CARLOSENRIQUEVERA@HOTMAIL.COM>; Luis Carlos Pereira Jimenez <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; Laura Katherine Miranda Contreras <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>

📎 1 archivos adjuntos (5 MB)

CONTESTACIÓN 2022-195 LUIS ANOTNIO RIZO QUINTANA VS PROTECCIÓN.pdf;

Buenas tardes

**Doctores del Juzgado 1 Civil del Circuito**

Pamplona - Norte de Santander

**REF: 2022- 195 LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA VS PROTECCIÓN**

En mi calidad de apoderada de la AFP PROTECCIÓN S.A., encontrándome dentro del término legal, me permito presentar contestación de la demanda del proceso en referencia.

Adicional a lo anterior, copio el presente correo a la parte actora y demás entidades demandadas.

Cordialmente,

--



**MATEO TRUJILLO URZOLA**

**Abogado Junior**

PBX 7449877 - 3153544478

Dirección: Cra. 7a No.16 -56 Oficina 702

Bogotá D.C. - Colombia

[www.legal-colombia.com](http://www.legal-colombia.com)

Doctora

**MARÍA TERESA LÓPEZ PARADA**

Juez primera (01) Civil del Circuito

Pamplona – Norte de Santander

**REF: ORDINARIO LABORAL DE LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA contra AFP PROTECCIÓN S.A. Y OTROS, RADICADO No. 2022-195.**

1

**MATEO TRUJILLO URZOLA**, identificado con la C.C. 1.032.491.748 de Bogotá, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No 337.563 del C. S. de la J, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en mi condición de abogado inscrito en el certificado de Cámara de Comercio de la Sociedad Legal Counselors Business & Services Colombia LTDA, quien funge como apoderado del FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., conforme consta en la escritura pública No. 325, de fecha 08 de abril de 2021, encontrándome dentro del término legal, me permito CONTESTAR la demanda interpuesta por el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, en los siguientes términos:

### FRENTE A LAS PRETENSIONES

#### DECLARATIVAS

1. **Me opongo a esta declaración**, por cuanto el demandante optó por afiliarse a la AFP Davivir hoy Protección S.A., una vez que los asesores suministraron información precisa, veraz y de fondo sobre las implicaciones de su traslado de régimen entre ellas sus desventajas, ventajas y las diferencias entre regímenes, conforme a esta asesoría el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA de manera libre y voluntaria decide afiliarse al RAIS suscribiendo el formulario de vinculación el 17/10/1995.
2. **Me opongo a esta declaración**, por cuanto el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA el 17/10/1995, solicitó traslado de régimen con la AFP Davivir hoy Protección S.A., previa asesoría de sus consultores en el cual no se ha probado vicio de consentimiento o situación anómala que anule el contrato válidamente suscrito entre las partes, haciendo improcedente la solicitud deprecada.

#### CONDENATORIAS

3. **Me opongo a esta declaración**, toda vez que a pesar de ser una pretensión dirigida a Porvenir afecta los intereses de mi representada, por cuanto el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, realizó traslado de régimen el 17/10/1995 con mi representada, previa asesoría por parte de los consultores de la AFP Davivir hoy Protección S.A., momento en el cual suministraron información precisa, veraz y de fondo sobre las implicaciones de su traslado, entre ellas sus desventajas,

ventajas y las diferencias conforme a ésta explicación la actora de manera libre y voluntaria decide afiliarse suscribiendo la solicitud de vinculación.

4. **Me opongo a esta declaración**, toda vez que a pesar de ser una pretensión dirigida a Colpensiones afecta los intereses de mi representada, por cuanto el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, realizó traslado de régimen el 17/10/1995 con mi representada, previa asesoría por parte de los consultores de la AFP Davivir hoy Protección S.A., momento en el cual suministraron información precisa, veraz y de fondo sobre las implicaciones de su traslado, entre ellas sus desventajas, ventajas y las diferencias conforme a ésta explicación la actora de manera libre y voluntaria decide afiliarse suscribiendo la solicitud de vinculación.
5. **Me opongo a esta declaración**, toda vez que a pesar de ser una pretensión dirigida a Colpensiones afecta los intereses de mi representada, por cuanto el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, realizó traslado de régimen el 17/10/1995 con mi representada, previa asesoría por parte de los consultores de la AFP Davivir hoy Protección S.A., momento en el cual suministraron información precisa, veraz y de fondo sobre las implicaciones de su traslado, entre ellas sus desventajas, ventajas y las diferencias conforme a ésta explicación la actora de manera libre y voluntaria decide afiliarse suscribiendo la solicitud de vinculación.
6. **Me opongo** a esta condena, por cuanto las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar y éstas deben ser claras y precisas, más aún cuando se actúa por intermedio de apoderado judicial.
7. **Me opongo** a que mi representada sea condenada en costas judiciales y agencias en derecho, por cuanto al no haber condena alguna en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., no es procedente dicha pretensión.

#### FRENTE A LOS HECHOS

1. **Es cierto**, de conformidad con la documental que reposa en el expediente.
2. **No me consta**, por ser una afirmación del demandante le corresponde a éste demostrar su dicho.
3. **No me consta**, por ser una afirmación del demandante le corresponde a éste demostrar su dicho.
4. **No es cierto** como está redactado. El señor Luis Antonio Rizo Quintana de manera libre y voluntaria decidió trasladarse de régimen con Davivir hoy Protección S.A., una vez que recibió asesoría por parte de los promotores de la AFP, en donde se le explicó las consecuencias de su traslado, las ventajas, desventajas, diferencias entre regímenes y todo lo ateniende en materia pensional.

5. **No me consta**, por ser una afirmación frente a un tercero (Porvenir). Sin embargo, se deja de presente que Protección trasladó todos los aportes de la CAI del demandante a la AFP PORVENIR.
6. **No es cierto**. El señor Luis Antonio Rizo Quintana de manera libre y voluntaria decidió trasladarse de régimen con Davivir hoy Protección S.A., una vez que recibió asesoría por parte de los promotores de la AFP, en donde se le explicó las consecuencias de su traslado, las ventajas, desventajas, diferencias entre regímenes y todo lo atinente en materia pensional.
7. **No es cierto**. El señor Rizo Quintana se trasladó del RPM al RAIS en el año 1995 con la AFP Davivir hoy Protección.
8. **No es cierto**. Los asesores de Davivir hoy Protección que realizaron el traslado de régimen del demandante brindaron una asesoría completa, veraz, oportuna que se acompañaba con una explicación motivada sobre las consecuencias de su vinculación, las diferencias entre regímenes, sus ventajas y desventajas y, de conformidad con la normatividad vigente para época, la cual, vale la pena aclarar, no contemplaba el deber del buen consejo toda vez que dicha obligación surgió en el 2009 con la ley 1328.
9. **No es cierto** en lo que respecta a mi representada, toda vez el promotor comercial de la AFP DAVIVIR hoy Protección que realizó el traslado de régimen del actor, brindó a aquel, una asesoría de manera profesional, la cual se basó en una explicación motivada donde se analizaba el caso concreto, los términos para trasladarse y en general todo lo que el gobierno nacional expidió en materia pensional.
10. **Es cierto** en lo que respecta a mi representada. Toda vez que la obligación de brindar el buen consejo nació con la ley 1328/2009 y para esa data el demandante no se encontraba afiliado con Protección.
11. **No es cierto**. Davivir hoy Protección a través de sus promotores brindaron al demandante una proyección de pensión de forma verbal de lo que sería su mesada de conformidad con la información suministrada en ese momento y dentro de la cual se le explicó que la misma está sujeta a las condiciones del mercado, estado civil, número de hijos, razón por la cual se hace necesario realizarla nuevamente al cumplir el capital acumulado para pensionarse.
12. **Es cierto** en lo que respecta a mi presentada, toda vez que para el año 2004 el demandante no estaba afiliado con Protección S.A.
13. **No me consta**, por ser una afirmación del demandante le corresponde a éste demostrar su dicho.

14. **No me consta**, por ser una afirmación del demandante le corresponde a éste demostrar su dicho.
15. **No es cierto** en lo que respecta a mi representada. El señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA se trasladó de régimen con la AFP DAVIVIR hoy PROTECCIÓN S.A., después de que el promotor comercial de la administradora, brindó una asesoría veraz, completa, oportuna y acompañada de una explicación motivada sobre las consecuencias de su vinculación, las diferencias entre regímenes, sus ventajas y desventajas, para que una vez bien informada tomara la decisión consiente de firmar el formulario de vinculación, documento que acredita el cumplimiento del deber de información.
16. **No es cierto**. Protección S.A., suministró asesoría al demandante de manera correcta, profesional, idónea y de conformidad con la normatividad vigente información que se encuentra soportada en el formulario de vinculación.
17. **No es un hecho**. Es una cita normativa de la Super Financiera.
18. **No me consta**, por ser una afirmación frente a un tercero (PORVENIR).
19. **No me consta**, por ser una afirmación frente a un tercero (COLPENSIONES).
20. **No me consta**, por ser una afirmación frente a un tercero (COLPENSIONES).

### FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

El día 17 de octubre de 1995, el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, solicitó de manera libre y voluntaria el traslado de régimen con la AFP DAVIVIR, en la cual no obra constancia de situación anómala o constreñimiento. Posteriormente el señor Rizo realizó un traslado dentro del RAIS con la AFP PORVENIR, entidad a la que fueron trasladados todos los aportes de la cuenta de ahorro individual de la demandante.

Ahora bien, respecto a la intención del demandante de solicitar la ineficacia de la afiliación es importante señalar que al no existir fundamentos fácticos ni jurídicos que apoyen la pretensión no hay lugar a dicha reclamación.

Es de resaltar que el demandante realizó traslado horizontal dentro del régimen de ahorro individual a la AFP PORVENIR el día 15 de enero de 1998, hecho que convalida la intención de permanecer vinculado al mismo, pues teniendo aún la posibilidad de retornar en esos momentos a COLPENSIONES no lo hizo.

Por su parte, el Decreto 692 de 1994, señala:

***“Artículo 11. Diligenciamiento de la selección y vinculación. La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a***

las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos anteriores **es libre y voluntaria por parte del afiliado**. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.

5

Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán **su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora**.

Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el efecto por la Superintendencia Bancaria, que deberá contener por lo menos los siguientes datos:

- a) Lugar y fecha;
- b) Nombre o razón social y NIT del empleador;
- c) Nombre y apellidos del afiliado;
- d) Número de cédula o NIT del afiliado;
- e) Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea afiliarse, la cual podrá estar pre impresa
- f) Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios del afiliado.

El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.

No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.

Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario deberá consignarse que la **decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones**. El formulario puede contener la leyenda pre impresa en este sentido..." (Negrillas fuera de texto).

Así mismo, se dio cumplimiento al deber de información que le atañe a mi representada y no se evidencia que exista ningún tipo de vicio de consentimiento, como error, dolo o fuerza que invalide la afiliación del actor y por ende devenga la nulidad de su vinculación. Por lo que es claro que la demandante recibió información detallada, clara, precisa y concisa sobre las ventajas y desventajas de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

## **SOBRE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y SU RECUPERACIÓN.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, existe un régimen excepcional para aquellas personas que al 1° de abril de 1994 contaran con 35 años de edad en el caso de las mujeres, 40 en el caso de los hombres o 15 años o más de servicios cotizados, evento en el cual pueden pensionarse en las condiciones que señalaban las normas que les resultaban aplicables en materia pensional antes de esa fecha, específicamente en cuanto a la edad de pensión, tiempo de cotización y el monto de la pensión de vejez.

6

Según lo señalan los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dichos beneficios se pierden si el afiliado decide trasladarse del régimen de prima media al de ahorro individual.

Sin embargo, en la Sentencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional, en aras de proteger la inminencia de los derechos adquiridos así como otros aspectos de orden constitucional, determinó que aquellos afiliados que al 1° de abril de 1994 tenían 15 o más años de servicios, a pesar de que se hubieran trasladado al Régimen de Ahorro Individual, si deciden retornar al Régimen de Prima Media se les puede aplicar el régimen de transición, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) que trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; y b) que dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media.

Ahora bien, la Ley 797 del 29 de enero de 2003 modificó los términos de permanencia para efectos de trasladarse entre regímenes estableciendo una permanencia mínima de 5 años.

Así mismo, señaló una restricción para aquellas personas a las que les falten 10 años o menos para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, impidiéndoles trasladarse, restricción que empezaría a operar después de un año de vigencia de esta Ley, es decir, a partir del 29 de enero de 2004.

En concordancia con dicha norma, el 28 de diciembre de 2003, mediante Decreto 3800, el Gobierno Nacional reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, advirtiendo que a las personas que al 28 de enero de 2004 les faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podían trasladarse por una única vez entre regímenes hasta dicha fecha.

Igualmente, en el artículo 3° desarrolló lo concerniente a la recuperación del régimen de transición, advirtiendo que a las personas que al 1° de abril de 1994 tuvieran 15 o más años de servicios prestados o de semanas cotizadas les será aplicable el régimen de transición, si deciden trasladarse del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y si, además de trasladar el saldo de la

cuenta de ahorro individual, ese saldo no resulta inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez en caso de haber permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido de haber permanecido afiliado en el Régimen de Prima Media.

Mediante la sentencia C-1024 del 20 de octubre de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *“Bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002”* (es decir quienes al 1º de abril de 1994 tenían 15 o más años de servicios o cotizaciones).

7

En este orden de ideas, en el evento en que no se reúnan las condiciones del artículo 3º del Decreto 3800, las personas con 15 o más años de servicios o cotizaciones al 1º de abril de 1994, que son las destinatarias de esta norma, no recuperan el régimen de transición y, en consecuencia, su traslado en cualquier tiempo del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media no resulta viable.

Ahora bien, para el traslado de régimen pensional, por recuperación del Régimen de Transición, es necesario que la administradora a la que la persona se encuentra afiliada, remita toda la información al Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, incluida la historia laboral, a fin de adelantar el estudio correspondiente para determinar la procedencia del traslado. Igualmente es necesario que las administradoras informen oportunamente a sus afiliados si el traslado resulta viable y si con éste se recupera el régimen de transición, lo que les permitirá efectuar la mejor elección de acuerdo con sus intereses.

Sin embargo, resulta del caso precisar que, la confirmación del cumplimiento de lo señalado en el literal b) del artículo 3º del Decreto 3800 de 2003 debe hacerla el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones de manera previa al traslado, advirtiendo en todo caso que, de no proceder el traslado, el afiliado deberá permanecer en el Régimen de Ahorro Individual, quedando el reconocimiento de las prestaciones a las que eventualmente tenga derecho a cargo de la sociedad administradora.

Finalmente, es importante señalar que el Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 3995 de 2008 (reglamentario de los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993), determinó los parámetros que debe atender el Instituto de Seguros Sociales para llevar a cabo el cálculo al que se ha hecho alusión en la presente contestación.

No obstante, está en manos de Colpensiones, determinar la viabilidad de traslado de la demandante.

En el caso en estudio, se tiene que a la fecha el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, en la actualidad cuenta con 67 años de edad, por lo que no sería posible efectuar el traslado de régimen por traslado normal. Sin embargo, al aplicar lo establecido en las Sentencias C-1024 de 2004, C-789 de 2002 y SU 062 de 2010 y considerando que el señor RIZO QUINTANA ha presentado solicitud de traslado a Colpensiones, se procedería a verificar los siguientes requisitos de manera anticipada al requerimiento que dicha entidad debería efectuar:

- a) Tener a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios prestados o cotizados, equivalentes a 750 semanas.
- b) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media.

Así las cosas, la AFP Protección S.A. validó si el demandante cumplía con los requisitos para regresar al régimen de transición, evidenciando que el señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, al 1 de abril de 1994, contaba con 38 años, al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social, y no contaba con 750 semanas cotizadas, por lo que el mismo no era beneficiario del régimen de transición.

En conclusión, para la procedencia del traslado del demandante como quedó expuesto en acápites precedentes, el único condicionamiento para que su traslado de Régimen sea viable, es acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 3800 de 2003, en concordancia con el 3995 de 2008.

Así las cosas, las pretensiones incoadas no están llamadas a prosperar, toda vez que la vinculación del demandante a la AFP DAVIVIR hoy PROTECCIÓN S.A., estuvo precedida de información completa, veraz y oportuna sobre las consecuencias y beneficios del traslado de régimen.

### **SOBRE LA INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN**

La comisión de administración es aquella que cobran las AFP'S para administrar los aportes que ingresan a la cuenta de ahorro individual de los afiliados, de cada aporte del 16% del IBC que ha realizado la demandante al Sistema General de Pensiones, la AFP ha descontado un 3% para cubrir los gastos de administración antes mencionados y para pagar el seguro previsional a la compañía de seguros, descuento que se encuentra debidamente autorizado en el artículo 20 de la ley

100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, y que opera tanto para el Régimen de Ahorro Individual como para el Régimen de Prima Media.

Durante todo el tiempo que la demandante ha estado afiliada al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Protección S.A., mi representada ha administrado los dineros que la misma ha depositado en su cuenta de ahorro individual, gestión que se ha realizado con la mayor diligencia y cuidado, pues Protección es una entidad financiera experta en la inversión de los recursos de propiedad de sus afiliados; adicionalmente, dicha gestión de administración se ve evidenciada en los buenos rendimientos financieros que ha generado la cuenta de ahorro individual de la demandante.

Ahora bien, en el hipotético evento que se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación al RAIS y se condene a mi representada a devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante a Colpensiones, **únicamente será procedente la devolución de los aportes de la cuenta de ahorro individual más los rendimientos financieros generados con la buena gestión de Protección**, pero no es procedente que se ordene la devolución de lo que mi representada descontó por comisión de administración, toda vez que, se trata de comisiones ya causadas durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante, descuentos realizados conforme a la ley y como contraprestación a una buena gestión de administración, como es legalmente permitido frente a cualquier entidad financiera.

En este orden de ideas, si la consecuencia de la ineficacia y/o nulidad de la afiliación es que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido se debe entender que el contrato de afiliación nunca existió y por ende, nunca Protección debió administrar los recursos de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que produjo dicha cuenta no se causaron y tampoco se debió cobrar una comisión de administración, sin embargo, el artículo 1746 habla de las restituciones mutuas, intereses, frutos y del abono de mejoras, con base en esto debe entenderse que aunque se declare una ineficacia y/o nulidad de la afiliación y se haga la ficción que nunca existió contrato, **no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras, por eso el fruto o mejora que obtuvo el afiliado son los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, producto de la buena gestión de la AFP y el fruto o mejora de la AFP es la comisión de administración, la cual debe conservar si efectivamente hizo rentar el patrimonio del afiliado.**

Así las cosas, se puede hablar de unas prestaciones acaecidas que no pueden desconocerse sobre todo cuando se trata de contratos que tienen que ver con el derecho laboral y de la seguridad social, toda vez que si se aplicara en estricto sentido la teoría de la nulidad del derecho privado mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieren dado o recibido, se llegaría a la conclusión que el afiliado debe devolver los rendimientos de su cuenta a la AFP y ésta última la comisión de administración al afiliado, toda vez que si la

comisión nunca se debió haber descontado, tampoco nunca debieron haber existido rendimientos.

Finalmente, es menester poner de presente que en caso de que se ordene a Protección devolver a Colpensiones los aportes de la demandante, los rendimientos generados y adicionalmente lo descontado por comisión de administración, se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de la demandante, pues estaría recibiendo unos rendimientos generados por la buena administración de mi representada, sin reconocer o pagar ningún concepto por la gestión realizada, realizando el juez una interpretación no acorde con la Constitución ni con la ley, en detrimento del patrimonio de mi representada, vulnerándosele el derecho a la igualdad y privilegiando de manera injustificada a una de las dos partes del contrato que fue declarado nulo y que fue suscrito de buena fe por mi representada.

10

Por todo lo anterior, se debe absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad legal.

### **EXCEPCIONES DE MÉRITO**

#### **1. DECLARACIÓN DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA DE LA DEMANDANTE AL MOMENTO DE LA AFILIACIÓN A LA AFP PROTECCIÓN S.A.**

Dentro del respectivo formulario de solicitud de vinculación suscrito por la propia demandante, se hizo constar en la casilla denominada voluntad de selección y afiliación, ***“HAGO CONSTAR QUE LA SELECCIÓN DE RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LA HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES. MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS DAVIVIR S.A., PARA QUE ADMINISTRE MIS APORTES PENSIONALES Y QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS.”***

Lo anterior evidencia la voluntad del actor de solicitar la vinculación a Davivir hoy Protección S.A, y bajo ninguna clase de engaños, ardidés o promesas fraudulentas.

Por lo anterior, las pretensiones incoadas no están llamadas a prosperar, toda vez que la vinculación de la demandante a la AFP Davivir hoy PROTECCIÓN S.A., se realizó respetando los parámetros legales de la información que se debe suministrar al potencial afiliado y no se encuentra viciada de nulidad.

#### **2. BUENA FE POR PARTE DE AFP DAVIVIR HOY PROTECCIÓN S.A.**

La demandada, AFP Protección S.A., ha actuado con la más absoluta buena fe frente a la afiliación del señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, ya que como antesala del traslado de la demandante a la AFP DAVIVIR, se le brindó información veraz, oportuna y suficiente sobre las ventajas y desventajas de trasladarse de régimen, decidiendo de manera libre y voluntaria suscribir su vinculación.

### 3. INEXISTENCIA DE CAPITAL ACUMULADO EN LA CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL DE LA DEMANDANTE EN LA AFP PROTECCIÓN S.A

Se fundamenta esta excepción en que la AFP Protección S.A, trasladó la totalidad de los dineros obrantes en la cuenta de ahorro individual del señor LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA, con sus correspondientes rendimientos, a las AFP PORVENIR, como consecuencia del tránsito voluntario que realizó el 15 de enero de 1998, conforme la constancia de traslados que se allega con la presente contestación.

11

### 4. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA OBLIGACIÓN.

La comisión de administración es aquella que cobran las AFP'S para administrar los aportes que ingresan a la cuenta de ahorro individual de los afiliados, de cada aporte del 16% del IBC que ha realizado la demandante al Sistema General de Pensiones, la AFP ha descontado un 3% para cubrir los gastos de administración antes mencionados y para pagar el seguro previsional a la compañía de seguros, descuento que se encuentra debidamente autorizado en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, y que opera tanto para el Régimen de Ahorro Individual como para el Régimen de Prima Media.

Ahora bien, en el hipotético evento que se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación al RAIS y se condene a mi representada a devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante a Colpensiones, únicamente será procedente la devolución de los aportes de la cuenta de ahorro individual más los rendimientos financieros generados con la buena gestión de PROTECCIÓN, pero NO es procedente que se ordene la devolución de lo que mi representada descontó por comisión de administración, toda vez que se trata de comisiones ya causadas durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante, descuentos realizados conforme a la ley y como contraprestación a una buena gestión de administración, como es legalmente permitido frente a cualquier entidad financiera.

Lo anterior se concluye de lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil que habla de los efectos de la declaratoria de nulidad "La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho **para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo**; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. **En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias**, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo.

En este orden de ideas, si la consecuencia de la ineficacia y/o nulidad de la afiliaciones que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido se debe entender que el contrato de afiliación nunca existió y por ende nunca PROTECCION debió administrar los recursos de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que produjo dicha cuenta no se causaron y tampoco se debió cobrar una comisión de administración, sin embargo el artículo 1746 habla de **las restituciones mutuas, intereses, frutos y del abono de mejoras**, con base en esto debe entenderse que aunque se declare una ineficacia y/o nulidad de la afiliación y se haga la ficción que nunca existió contrato, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras, por eso el fruto o mejora que obtuvo el afiliado son los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, producto de la buena gestión de la AFP y el fruto o mejora de la AFP es la comisión de administración, la cual debe conservar si efectivamente hizo rentar el patrimonio del afiliado.

Así las cosas, se puede hablar de unas prestaciones acaecidas que no pueden desconocerse sobre todo cuando se trata de contratos que tienen que ver con el derecho laboral y de la seguridad social, toda vez que si se aplicara en estricto sentido la teoría de la nulidad del derecho privado mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieren dado o recibido, se llegaría a la conclusión que el afiliado debe devolver los rendimientos de su cuenta a la AFP y ésta última la comisión de administración al afiliado, toda vez que si la comisión nunca se debió haber descontado, tampoco nunca debieron haber existido rendimientos.

**La teoría de las prestaciones acaecidas que no pueden desconocerse fue puesta de presente por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en la Sentencia con Radicado No. 31989 del nueve (9) de septiembre de dos mil ocho (2008), Magistrado Ponente Eduardo López Villegas, cuando manifestó que “Las consecuencias de la nulidad de la vinculación respecto a las prestaciones acaecidas no es plenamente retroactiva como lo determina la normatividad del derecho privado, la que no tienen cabida. Enteramente en el derecho social, de manera que a diferencia de propender por el retorno al estado original, al momento en que se formalizó el acto anulado, mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieren dado o recibido, ha de valer el carácter tutelar y preservar situaciones consolidadas ya en el ámbito del derecho laboral ora en el de la seguridad social”.**

Finalmente, es menester poner de presente que en caso de que se ordene a PROTECCIÓN devolver a Colpensiones los aportes de la demandante, los rendimientos generados y adicionalmente lo descontado por comisión de administración, se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de la demandante, pues estaría recibiendo unos rendimientos generados por la buena administración de mi representada, sin reconocer o pagar ningún concepto por la gestión realizada, realizando el juez una interpretación no acorde con la Constitución ni con la ley, en detrimento del patrimonio de mi representada, vulnerándosele el derecho a la igualdad y privilegiando de manera injustificada a una de las dos partes del contrato que fue declarado nulo y que fue suscrito de buena fe por mi representada.

En mérito de todo lo expuesto, me permito proponer la presente excepción con el fin de que en el hipotético evento que se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación al RAIS y se condene a mi representada a devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante a Colpensiones, sólo sea ordenada la devolución de los aportes más los rendimientos financieros, y en ningún caso se debe obligar a mi representada a devolver conjuntamente los rendimientos y la comisión de administración, toda vez que se trata de prestaciones ya acaecidas, por lo que no puede desconocerse que la cuenta de ahorro individual produjo unos rendimientos GARCÍAs a la buena gestión de la AFP, la cual a su vez cobró una comisión para hacer rentar dichos dineros, por lo tanto son conceptos excluyentes, es decir que no se pueden devolver los dos al afiliado, pues no hay causa ni fáctica ni jurídica para hacerlo, toda vez que se estaría desconociendo el trabajo que durante años ha realizado mi representada, vulnerándose a la AFP el derecho a las restituciones mutuas con frutos, intereses y mejoras, y la igualdad de trato en el marco de una relación contractual precedida de buena fe.

##### **5. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL SEGURO PREVISIONAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y PORQUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE.**

De conformidad con el artículo 20 de la ley 100 de 1993, tanto en el Régimen de Prima Media como en el de Ahorro Individual el 3% del IBC de los afiliados al Sistema General de Pensiones se destina a pagar la comisión de administración y el SEGURO PREVISIONAL, éste último se le paga mes a mes a una aseguradora para que en caso de que ocurra un siniestro por invalidez o sobrevivencia dicha entidad pague la suma adicional necesaria para financiar la pensión de invalidez o sobrevivencia.

A su turno, en el artículo 108 de la precitada ley se señalan las reglas y condiciones generales bajo las cuales deben operar "los seguros que contraten las administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes (...)". Así mismo, el Gobierno Nacional a través de los Decretos 876 y 1161 ambos de 1994, fijó las reglas particulares aplicables al seguro de invalidez y sobrevivencia, respecto de las cuales la Superintendencia Financiera impartió instrucciones a través del Capítulo II numeral 3.2 de la Circular Externa Básica Jurídica 007 de 1996.

Del contexto de las normas enunciadas se infiere que la prestación a cargo de las aseguradoras en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad constituye un componente de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la medida en que se concreta al pago de la suma adicional requerida para completar el capital que financie el monto de pensión por estos conceptos, y para que la aseguradora pague dicha suma adicional, mes a mes la Administradora de Fondos de Pensiones le paga un SEGURO PREVISIONAL proveniente del Ingreso Base de Cotización de los afiliados al Sistema General de pensiones.

Así las cosas, en el hipotético evento que se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual y se condene a mi representada a devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual a COLPENSIONES, únicamente será procedente la devolución de los aportes de la cuenta de ahorro individual más los rendimientos financieros generados con la buena gestión de PROTECCIÓN, pero NO es procedente que se ordene trasladar lo concerniente a lo que mi representada descontó por SEGURO PREVISIONAL, toda vez que dicho porcentaje fue descontado con base en la Ley **y fue girado directamente a la aseguradora prestante del servicio, quien es un tercero de buena fe.**

La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, se ha pronunciado frente a los **terceros de buena fe**, cuando se declara la nulidad del negocio jurídico de la siguiente manera:

*«De todo ello se sigue que en virtud del negocio simulado pueden llegar a constituirse legítimos intereses en el mantenimiento de la situación aparente por parte de los terceros de buena fe. "...los terceros que no se pueden ver perjudicados por la nulidad del negocio simulado –refiere la doctrina contemporánea– son los terceros de buena fe, los que obran en base a la confianza que suscita un derecho aparente; los que no pudieron advertir un error no reconocible; los que ‘obrando con cuidado y previsión’ se atuvieron a lo que ‘entendieron o pudieron entender’, vale decir, a los términos que se desprenden de la declaración y no a los que permanecen guardados en la conciencia de los celebrantes”.*

En armonía con lo anterior, se solicita que mi representada no sea obligada a devolver el valor del SEGURO PREVISIONAL, toda vez que mensualmente de la cuenta de ahorro individual se descontó dicho seguro y se le pagó a una aseguradora para que en caso de que hubiera existido un siniestro de invalidez o sobrevivencia ésta pagara una suma adicional que financiara las pensiones por dichos conceptos. Así mismo, el SEGURO PREVISIONAL ya fue pagado mes a mes a la aseguradora y mi representada ya está imposibilitada para recobrárselo y devolvérselo a COLPENSIONES, toda vez que en este caso **la aseguradora es un tercero de buena fe** que nada tuvo que ver en el contrato suscrito entre el afiliado y PROTECCIÓN.

## 6. PRESCRIPCIÓN

De todos y cada uno de los derechos reclamados y por el simple transcurso del tiempo, para el momento de la presentación de la demanda, solicito se declare la prescripción, puesto que, la demandante conocía perfectamente la diferencia entre el funcionamiento del RPM y el RAIS y optó por continuar en este último, ratificando su permanencia desde el año 1995.

## 7. EXCEPCIÓN GENÉRICA (ART. 282 C.G.P)

Consiste esta excepción en que, si al efectuarse un estudio detallado y una valoración conjunta de la prueba, la juez encontrare probada alguna excepción

la misma deberá ser declarada al proferirse la sentencia de manera oficiosa conforme lo establece el Artículo 282 del C.G.P.

Por lo anterior, solicito a usted señora Juez, declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y alegadas con el presente escrito.

15

## PRUEBAS

De otro lado, solicito al señor Juez se decreten, practiquen y se tengan las siguientes como pruebas:

### I. DOCUMENTALES:

- Formulario de vinculación de la AFP DAVIVIR No. 221020.
- Constancia de traslado de aportes de la cuenta de ahorro individual del demandante a la AFP PORVENIR.
- Copia del Sistema de Información de los afiliados a las Administradoras de los Fondos de Pensión **SIAFP**.

### II. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito a la señora Juez, se sirva citar en su despacho al demandante **LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA**, para que absuelva interrogatorio oral o por escrito que le formularé con base en los hechos relacionados con el proceso, de conformidad con el artículo 202 del C.G.P.

## ANEXOS

- Los documentos aducidos como prueba.
- Copia de la escritura Pública No. 325 de fecha 08 de abril de 2021, otorgada en la notaría 14 de la ciudad de Medellín, donde Protección S.A., confiere poder especial a la firma de abogados Legal Counselors Business & Services Colombia.
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la firma de abogados Legal Counselors Business & Services Colombia.
- Cédula del Doctor Mateo Trujillo Urzola.
- Tarjeta Profesional del Doctor Mateo Trujillo Urzola.

## NOTIFICACIONES

A la demandante y las demandadas, en las direcciones aportadas en la demanda.

El suscrito recibirá notificaciones en la secretaría de su despacho o en la carrera 7 No. 16-56, oficina 702 de la ciudad de Bogotá D.C., P.B.X. (057-1) 7449877 y Cel. 3108549414, y en el correo electrónico: [mateotrujillo@legal-colombia.com](mailto:mateotrujillo@legal-colombia.com) – [info@legal-colombia.com](mailto:info@legal-colombia.com)

16

De la señora Juez. Atentamente,



MATEO TRUJILLO URZOLA  
C.C. No 1.032.491.748 de Bogotá  
T.P. No. 337.563 del C.S.J.

**CONTESTACION A LA DEMANDA LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA****54518311200120220019500**

Isabel Cristina Botello Mora &lt;titen50@hotmail.com&gt;

Jue 16/03/2023 9:27

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - N. De Santander - Pamplona

&lt;j01cctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;;abogado1@aja.net.co &lt;abogado1@aja.net.co&gt;;Saray Riatiga &lt;coord.santander.aj@gmail.com&gt;

 9 archivos adjuntos (7 MB)

CONTESTACIÓN DE DEMANDA DTE.LUIS-RIZO-54518311200120220019500 (1).pdf; SUSTITUCIÓN LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA .pdf; ESCRITURA PÚBLICA CON NOTA VIGENCIA 12-02-2021 (6) (1).pdf; Certificado de existencia y representación legal Colpensiones..pdf; CEDULA LEAJ (10) (1) (1).pdf; TARJETA PROFESIONAL LEAJ (3) (1) (1).pdf; CEDULA LEAJ ISABEL CRISTINA BOTELLO.pdf; TARJETA PROFESIONAL ISABEL BOTELLO.pdf; CC--88137009.rar;

Muy buenos días por medio del siguiente correo con su respectivo archivo adjunto me permito remitir de la manera más respetuosa CONTESTACION A LA DEMANDA LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA 54518311200120220019500, quedo atenta a las indicaciones agradeciendo su amable colaboración

Atentamente

Isabel Botello

Apoderado externo Colpensiones

celular 3214209305

Señores

**JUZGADO CIVIL - LABORAL 001 DE CIRCUITO DE PAMPLONA**

**E. S. D.**

**REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**RADICADO: 54518311200120220019500**  
**DEMANDANTE: LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA CC 88137009**  
**DEMANDADO: 1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – NIT: 900.336.004-7**  
**2. LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CENSATÍAS PROTECCIÓN S.A. NIT: 800.138.188-1**  
**3. LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CENSATÍAS PORVENIR S.A.**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**ISABEL CRISTINA BOTELLO MORA**, mayor de edad y de esta vecindad, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la cedula de ciudadanía No. 60.390.346 de la Ciudad de Cúcuta, y T. P. No. 282.196 del C.S. de la J., actuando en mi condición de apoderada sustituta del Doctor **LUIS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO**, quien es mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Cali, portador de la cedula de ciudadanía No. 16.736.240 y tarjeta profesional No. 56302 del Consejo Superior de la judicatura, según Poder otorgado por la administradora colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, por medio del presente escrito, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia, instaurado por la **Parte demandante: LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA CC 88137009**, en contra de **COLPENSIONES**, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la demandante.

#### **NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**, identificado con la cédula de ciudadanía 12102957, quien obra en su calidad de presidente, según consta en el Acuerdo No Acuerdo 007 del 31 de agosto de 2021, debidamente posesionado, con fecha de inicio del cargo 26 de enero de 2023. El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

## PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Rechazo todas y cada una de las declaraciones y condenas deprecadas en la demanda, que sin fundamento se solicitan y me opongo a sus declaratorias y reconocimientos por carecer todas ellas de sustento jurídico y fáctico. En consecuencia, solicito comedidamente se **ABSUELVA** a mí Representado de los cargos formulados en su contra y se condene en costas a la parte actora.

COLPENSIONES no puede hacer nada diferente a cumplir la Constitución y la Ley y sus reglamentos, a cuyas disposiciones están sometidos también los afiliados.

Así como se expresó en la contestación de la demanda y como se demostrará en el proceso, al demandante no le asiste el derecho reclamado y, por tanto, COLPENSIONES está exento del pago de la obligación solicitada.

### DECLARATIVAS:

**PRIMERO:** Me opongo a que se declare la Nulidad absoluta o ineficacia de la afiliación y traslado realizada inicialmente por el demandante, a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCION S.A., afiliación que generó el cambio de afiliación del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida específicamente del Instituto de Seguro Social (ISS) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto se evidencia la manifestación libre y voluntaria del demandante.

Esto es, teniendo en cuenta que, en principio, la escogencia y afiliación a un determinado régimen de pensiones, debe ser un acto libre, consciente y voluntario del trabajador. Por lo tanto, en lo referente a la nulidad se tiene que, para que pueda predicarse existencia y validez de la afiliación, ésta debe reunir los requisitos dispuestos en el artículo 1502 del Código Civil, esto es, que la declaración de voluntad debe provenir de una persona legalmente capaz, que preste su consentimiento sin error, fuerza o dolo que lo vicie, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga además una causa lícita.

Ante la ausencia de uno de estos elementos, el acto es inexistente y de presentarse alguno de los vicios enunciados, se entiende que es nulo el acto de afiliación y, en consecuencia, no es posible hacerle producir efectos en el mundo jurídico. Por lo tanto, en el asunto examinado, no se logra colegir la ausencia de alguno de los elementos anteriormente mencionados, ni tampoco que fuese engañado y conducido a un error en su convencimiento. Por el contrario, se evidencia la manifestación libre y voluntaria del demandante de permanecer al régimen de ahorro individual con solidaridad y a su vez, la validez del formulario de afiliación que perfeccionó tal voluntad.

En igual sentido, respecto a la ineficacia de la afiliación, una vez revisado el acervo probatorio, no se encuentra elemento alguno que permita dar cuenta que, se presentó una falta de información por parte del fondo privado al momento de llevarse a cabo la suscripción del formato de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad y que, por lo tanto, la

insuficiencia de la información afecte los intereses del afiliado en procura de reivindicar su derecho o el acceso al mismo.

**SEGUNDO:** Me opongo a que se declare la Nulidad Absoluta o ineficacia de la afiliación para efectos legales que nunca se trasladó, toda vez que, no existe fundamento que permita la declaratoria de nulidad del acto que dio origen al traslado de régimen pensional, si se evidencia la manifestación libre y voluntaria del demandante, de permanecer al régimen de ahorro individual con solidaridad y a su vez, la validez del formulario de afiliación que perfeccionó tal voluntad, tampoco existe fundamento que permita llevar a cabo esta pretensión.

#### **CONDENATORIAS:**

**TERCERO:** Me opongo a que se ordene al fondo **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A** a trasladar a **COLPENSIONES**, todos los valores que hubiere recibido en condición de Administradora del Régimen de Ahorro Individual, con motivo de la afiliación hecha, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora; con todos sus frutos e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con todos los rendimientos, toda vez que, si no existe fundamento que permita la declaratoria de nulidad del acto que dio origen al traslado de régimen pensional al RAIS, tampoco existe fundamento que permita llevar a cabo esta pretensión.

**CUARTO:** Me opongo a que se ordene el regreso o retorno automático del demandante, al RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, la a Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES con la aceptación de los correspondientes aportes y demás incrementos de orden legal, como intereses y gastos deducidos por administración del sistema, etc., por cuanto no le asiste derecho al accionante por haberse afiliado de forma voluntaria y sin presión al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (RAIS) y se mantuvo en este hasta hoy fecha, por lo cual, incurso en lo establecido por el literal B) del art. 13 de la ley 100 de 1993; y, el literal E) Modificado por la Ley 797 de 2003, por estar a menos de diez (10) años para pensionarse.

**QUINTO:** Me opongo a que se ordene a la administradora colombiana de pensiones COLPENSIONES a recibir sin solución de continuidad al demandante y, quede afiliado al régimen de prima media con prestación definida que administra hoy COLPENSIONES, por cuanto no le asiste derecho al accionante por haberse afiliado de forma voluntaria y sin presión al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (RAIS) y se mantuvo en este hasta hoy fecha, por lo cual, incurso en lo establecido por el literal B) del art. 13 de la ley 100 de 1993; y, el literal E) Modificado por la Ley 797 de 2003, por estar a menos de diez (10) años para pensionarse.

**SEXTO:** Me opongo a que se tenga en cuenta los principios extra y ultra petita, en contra de mi representado en razón de que siempre se ha obrado de buena fe, y conforme a los a lo establecido por el literal B) del art. 13 de la ley 100 de 1993; y, el literal E) Modificado por la Ley 797 de 2003, por estar a menos de diez (10) años para pensionarse.

**SÉPTIMO:** Me opongo a que se condene en costas procesales a mi representada porque se ha obrado de buena fe, con apego al derecho y no le asiste derecho al accionante por haberse afiliado de forma voluntaria y sin presión al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (RAIS) y se mantuvo en este hasta hoy fecha, por lo cual, incurso en lo establecido por el literal B) del art. 13 de la ley 100 de 1993; y, el literal E) Modificado por la Ley 797 de 2003, por estar a menos de diez (10) años para pensionarse.

Es importante señalar que la entidad que represento hoy COLPENSIONES, administra un patrimonio de los asegurados que tiene la obligación de vigilar, esta razón hace que tenga que ser cauto y cuidadoso al reconocer una prestación y sólo debe hacerlo cuando exista absoluta certeza del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.

Disponer de estos dineros reconociendo y pagando prestaciones sin bases legales o certeza absoluta sobre el derecho de los beneficiarios, conlleva a cometer un delito que obviamente pueden asumir los funcionarios como personas naturales, y el ente como persona jurídica. Ello demuestra la buena fe de su actuar.

No es dable desconocer por vía de Jurisprudencia, tan claras reglas legales sobre prestaciones y obligaciones de las Entidades de seguridad social, que todos los juzgadores están obligados a acatar.

### **PRONUNCIAMIENTO EXPRESO Y CONCRETO SOBRE CADA UNO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**PRIMERO:** Es cierto, conforme se demuestre en los documentos aportados de cédula de ciudadanía y lo que obre en el expediente administrativo e historia laboral aportado al proceso, sin aceptar lo que se pretende por el demandante.

**SEGUNDO:** Es cierto, conforme se demuestre en los documentos aportados de cédula de ciudadanía y lo que obre en el expediente administrativo e historia laboral aportado al proceso, sin aceptar lo que se pretende por el demandante.

**TERCERO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**CUARTO:** Es cierto, conforme se demuestre con el formulario de traslado y los documentos aportados por la parte demandante.

**QUINTO:** Es cierto, conforme se demuestre con el formulario de traslado y los documentos aportados por la parte demandante.

**SEXTO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**SÉPTIMO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**OCTAVO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**NOVENO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DÉCIMO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**UNDÉCIMO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DUODÉCIMO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DECIMOTERCERO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DECIMOCUARTO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DECIMOQUINTO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DECIMOSEXTO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DECIMOSÉPTIMO:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva basado en un criterio jurídico que no constituye situación fáctica en este proceso, por lo que se solicita que sea desestimado.

**DECIMOCTAVO:** No me consta, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas a mi representada, de las cuales se desconoce su veracidad y que deberán ser acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

**DECIMONOVENO:** Es cierto que el demandante, el día 11 de julio de 2022, solicito ante Colpensiones el traslado del régimen de Ahorro individual con solidaridad al Régimen de prima media con prestación definida.

**VIGÉSIMO:** Es cierto, el 19 de julio de 2022, obtiene respuesta negativa, en el cual le indican que: *“no es procedente acceder a su solicitud, por cuanto el traslado efectuado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual fue realizado ejerciendo el derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, Artículo 13 literal B (...).”* Por lo tanto, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

## FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

El demandante solicita la nulidad e ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad y, que, por consiguiente, sean devueltos todos los valores, aportes, cotizaciones y demás que se hubieren podido recibir en el mencionado régimen, a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, argumentando que hubo una indebida información al momento de realizarse su traslado de régimen, del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad; actos que, no

corresponden a mi representada y de los cuales tampoco tuvo conocimiento al momento de realizarse, simplemente se acató la voluntad del demandante de trasladarse de régimen pensional conforme a la normatividad. Por lo cual, los hechos alegados en el libelo demandatorio referentes a la indebida información y engaño por parte del fondo privado, deberán ser probados a lo largo del proceso judicial y no son competencia de mi representada.

**- REFERENTE A LA INEFICACIA Y/O NULIDAD DEL TRASLADO Y AFILIACIÓN:**

La petición encaminada a la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado no resulta procedente, teniendo en cuenta que a la fecha, el traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, goza de plena validez a la luz de las leyes colombianas, ya que el mismo se realizó ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen establecido en el art. 13 literal B de la ley 100/93 y la afirmación de indebida y engañosa información, deberá alegarse y demostrarse en el transcurso del proceso judicial.

En ese sentido, al referirnos a la validez del traslado realizado por el demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad se tiene que el mismo se realizó bajo el derecho a la libre elección de régimen que le asiste al demandante y que se consagra de la siguiente manera:

**LEY 1328 DEL 2009.- ARTÍCULO 48.**

Modifícase los literales c) y, d) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, los cuales quedarán así:

**c)** Los afiliados al sistema podrán escoger y trasladarse libremente entre entidades administradoras y entre los Fondos de Pensiones gestionados por ellas según la regulación aplicable para el efecto, así como seleccionar la aseguradora con la cual contraten las rentas o pensiones.

En todo caso, dentro del esquema de MULTIFONDOS, el Gobierno Nacional definirá unas reglas de asignación al fondo moderado o conservador, para aquellos afiliados que no escojan el fondo de pensiones dentro de los tiempos definidos por las normas respectivas, reglas de asignación que tendrán en cuenta la edad y el género del afiliado.

Así mismo, la administradora tendrá la obligación expresa de informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopción de decisiones informadas.

Por su parte, el afiliado deberá manifestar de forma libre y expresa a la administradora correspondiente, que entiende las consecuencias derivadas de su elección en cuanto a los riesgos y beneficios que Caracterizan este fondo.

En igual sentido, la facultad de migrar de un régimen pensional a otro surge por disposición del **artículo 13 ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003** donde señaló:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (aparte subrayado condicionado bajo el entendido que “ las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002).

- **RESPECTO DEL COMPORTAMIENTO DEL AFILIADO EN EL SISTEMA:**

En materia de traslado de régimen pensional el precedente jurisprudencial ha mantenido una posición garantista en favor de los afiliados, que reúne los siguientes escenarios:

Respecto al consentimiento informado del afiliado

Al momento de aceptar su ingreso al fondo la jurisprudencia ha definido que las administradoras de pensiones tienen la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que le permita al afiliado elegir entre las diferentes opciones, la que mejor se ajuste a sus intereses; por cuanto, no puede alegarse *«que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito»* (CSJ SL12136-2014).

Así mismo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1688-2019, luego de realizar un recuento normativo, concluyó que *“las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional”*

Respecto a la carga de la prueba

En materia probatoria, por regla general corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y **atendiendo las situaciones particulares del caso**, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias.

En los eventos de traslado de Régimen, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia **sin atender las situaciones particulares de cada caso**, invierte la carga de la prueba en cabeza del fondo privado y exime al demandante de probar la existencia de un vicio del consentimiento al momento de afiliarse al RAIS, obligando a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en una de las partes, sin que exista un menor esfuerzo procesal en cabeza del demandante.

Así las cosas, en aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, se ha invertido la carga probatoria, quedando en cabeza de los fondos de pensiones, la obligación de desvirtuar los supuestos alegados por los demandantes acerca de la suficiencia de la información suministrada al momento del traslado; exigencia probatoria que no ha podido ser acreditada por los fondos puesto que cuentan únicamente con los formularios de afiliación, conllevando que los fallos judiciales en la actualidad se expidan en contra de dichas entidades y de manera colateral afecten los intereses de Colpensiones.

Por consiguiente, la posición jurisprudencial creó una situación ventajosa que favorece a los afiliados, puesto que su simple afirmación respecto a que el fondo no les brindó información precisa, clara y exacta, plasmada en una demanda interpuesta en cualquier tiempo, les viene permitiendo obtener el traslado al Régimen de Prima Media, sin que sea necesario que allegue el más mínimo elemento probatorio al interior del proceso.

□ Interpretación del artículo 1604 del Código Civil:

El artículo 1604 del Código Civil señala que *“El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. (...) La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo;”*

La Corte Suprema dentro de la jurisprudencia objeto de análisis, invierte de manera irracional y no ponderada la carga de la prueba, suscitando que la responsabilidad en cabeza de los fondos se convierta en objetiva, toda vez que no exige al demandante aportar soporte alguno que demuestre la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de afiliarse al RAIS; y obliga a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en el fondo, sin que exista el menor esfuerzo procesal en cabeza del demandante.

□ Respecto a la naturaleza de los demandantes (parte débil y afiliado lego)

Dentro de las providencias relacionadas con traslado de régimen, la Corte Suprema desconoció el precedente constitucional al valerse de manera generalizada de la presunta ignorancia de la ley por parte de los afiliados, para considerarlos como parte débil y en consecuencia legos o inexpertos, desconociendo adicionalmente que el error de derecho no es justificable en los negocios jurídicos, menos para buscar un aprovechamiento pensional.

Sin embargo, la anterior posición no es de recibo de la totalidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto en reciente pronunciamiento dentro del radicado 68852, el Magistrado Jorge Luis Quiroz aclaró su voto, señalando:

*“...el acto de traslado, si bien impone un deber de información suficiente de parte de las administradoras, ello, per se, no exonera al afiliado del deber de concurrir suficientemente ilustrado a la escogencia de su régimen pensional, de la cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a la prestación por vejez; como tampoco lo sustraen de la aplicación de la ley, para darle un tratamiento desigual, como si su capacidad para celebrar actos y contratos estuviera menguada frente a la definición de un acto de la mayor importancia, en la medida en que de su elección dependerán las condiciones de cubrimiento de las contingencias, amparadas por el sistema de seguridad social y en particular la de vejez.*

Agregó el magistrado Quiroz que la condición del promotor de la acción de nulidad merece una especial atención, pues *“...no es lo mismo que el ex ministro de hacienda que participó en la construcción de las reglas acuda a solicitar la nulidad, frente a la solicitud que haga un iletrado campesino cuya imposibilidad de leer lo haya llevado a un traslado de régimen y pretenda su nulidad por vicio del consentimiento.*

Respecto al traslado de recursos.

La Corte Suprema dentro de los aludidos fallos ordena trasladar a la administradora del régimen de prima media, los valores correspondientes a las cotizaciones, rendimientos financieros y gastos de administración, pertenecientes a la cuenta individual del actor, en muchos casos debidamente indexados.

Respecto a la prescripción de la acción.

Dicho fenómeno extintivo está regulado en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo un término trienal para el efecto.

En razón a lo anterior, señala la Corte que la positivización de dicha figura jurídica no significa que su aplicación opere de manera automática, en perjuicio de la posibilidad de acceder a derechos laborales o pensionales que gozan del carácter de imprescriptibles, indicando que:

*“...la exigibilidad judicial del derecho a la pensión o a obtener su valor real es imprescriptible (CSJ SL8544-2016); por tanto, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales establecidos. Tal carácter deriva de la protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de la Constitución Política, y de los mandatos de protección especial y solidaria hacia los sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta”, así concluyó erradamente la Corte que “...quien no pone en funcionamiento el aparato judicial para reclamar un derecho fundamental e indisponible como la pensión, así como los elementos indisolubles de su estructuración dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, se encuentra habilitado para requerirlo en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción”.*

La Corte también ha indicado que existen ciertos comportamientos y actividades que demuestran el compromiso de un afiliado de permanecer en un régimen pensional.

Al respecto en la sentencia SL413-2018, expresó: “Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado”.

Por lo cual, no puede predicarse ausencia absoluta de información al afiliado cuando ha recibido información acerca de su saldo en su cuenta de ahorro individual, modalidades de pensión y/o cualquier tipo de notificación a través de los canales de servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones y con todo esto, permanecer un número de años considerables al Fondo Privado, demostrando el deseo de seguir perteneciendo al mismo.

#### - PERJUICIO A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA PENSIONAL:

A este respecto, es importante traer a colación los argumentos de la Corte Constitucional en su sentencia C-1024/2004 de la Corte Constitucional, “(..) la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la *descapitalización* del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la *equidad* en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.

A juicio de esta Corporación, el *período de carencia* previsto en la norma demandada no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, básicamente por las siguientes consideraciones.

Para esta Corporación, el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites

para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales. Ahora bien, la Corte ha sostenido que dicha diversidad de trato no puede considerarse *per se* contraria al Texto Superior, pues es indispensable demostrar la irracionalidad del tratamiento diferente y, más concretamente, la falta de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida en el logro de un fin constitucionalmente admisible.

Desde esta perspectiva, el *objetivo* perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la *descapitalización* del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al *fondo común* y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de ajuste con la realidad económica del país, simplemente podría llegar a poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y futuros pensionados.

Así las cosas, el período de carencia o de permanencia obligatoria, permite, en general, una menor tasa de cotización o restringe la urgencia de su incremento, al compensar esta necesidad por el mayor tiempo que la persona permanecerá afiliado a un régimen, sin generar los desgastes administrativos derivados de un traslado frecuente y garantizando una mayor utilidad financiera de las inversiones, puesto que éstas pueden realizarse a un largo plazo y, por ello, hacer presumir una creciente rentabilidad del portafolio conformado por la mutualidad del fondo común que financia las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida”.

Es de destacar también sobre este proceso, respecto que, el reconocer la nulidad o ineficacia del traslado solicitada y trasladar la totalidad de los aportes a Colpensiones, atenta de igual forma contra la estabilidad del sistema pensional colombiano administrado por esta, pues al permitírsele dicho traslado al demandante después de vencida la oportunidad legal para ello (esto es, los 10 años), transgrede la finalidad constitucional del término establecido en la precitada norma.

En palabras de la Corte Constitucional, este artículo tiene como fin “(...) evitar la descapitalización del sistema general de pensiones y asegurar de este modo el pago futuro de las pensiones de los afiliados y el reajuste económico de las mismas.” Sentencia T-427 de 2010. Con el traslado de afiliados se pone en grave peligro el patrimonio económico de todos los cotizantes al Régimen de prima Media, con lo que la contestación estará dirigida a proteger y salvaguardar los derechos e intereses de la entidad.

La C. Const., en sentencia de constitucionalidad C- 1024 de 2004, sostuvo:

“sí las cosas, el período de carencia o de permanencia obligatoria, permite, en general, una menor tasa de cotización o restringe la urgencia de su incremento, al compensar esta necesidad por el mayor tiempo que la persona permanecerá afiliado a un régimen, sin generar los desgastes administrativos derivados de un traslado frecuente y garantizando una mayor utilidad financiera de las inversiones, puesto que éstas pueden realizarse a un largo plazo y, por ello, hacer presumir una creciente rentabilidad del portafolio conformado por la mutualidad del fondo común que financia las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida.

Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que, una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: “obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”.

Por otra parte, el período de permanencia previsto en la ley, de igual manera permite defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues como previamente se expuso, se aparta del valor material de la justicia que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad a partir de los rendimientos producidos por la administración de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiados del riesgo asumido por otros (C.P. preámbulo y art. 1°), o eventualmente, subsidiados a costa de los recursos ahorrados con fundamento en el aporte obligatorio que deben realizar los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, para garantizar el pago de la garantía de la pensión mínima de vejez cuando no alcanzan el monto de capitalización requerida[8], poniendo en riesgo la cobertura universal del sistema para los ahorradores de cuentas individuales.

La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 48”).

Pudiéndose concluir que, a pesar de que los fondos privados trasladen a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES – la totalidad de Cotizaciones, rendimientos financieros y gastos de administración, pertenecientes a la cuenta individual del actor, debidamente indexados por el periodo en que el actor permaneció afiliado al mismo, se genera una afectación al sistema pensional por cuanto nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema dado que el período de permanencia obligatoria contribuye al logro de los principios de universalidad y

eficiencia y asegura la intangibilidad y sostenibilidad del sistema al preservar los recursos dispuestos para garantizar el pago futuro de mesadas y el reajuste periódico de las mismas. Según la Corte, el fondo del régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Adicionalmente, las sentencia SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indica que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que “el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato”.

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales.

- **ACERCA DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE INFORMACIÓN CLARA O INDUCCIÓN AL ERROR POR PARTE DEL FONDO PRIVADO:**

Es menester traer a colación el **PRECEDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA 1ª DE DECISIÓN LABORAL:**

**REFERENCIA:** NULIDAD DE TRASLADO DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA AL RAIS POR INDUCCIÓN AL ERROR.

La Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los magistrados MARINO CARDENAS ESTRADA, JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ y HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ.

La sentencia, en esta ocasión, responde al conflicto jurídico consistente en establecer si la decisión que llevó a la asegurada a trasladarse de régimen pensional, retirándose del entonces INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y habiéndose afiliado a PORVENIR S.A., pasando del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, lo cual trae como consecuencia la pérdida del régimen de transición, estuvo motivada por una inducción al error en la que eventualmente habría incurrido PORVENIR S.A. para concretar dicho traslado; o si por el contrario, el mismo se dio de manera libre y voluntaria por la actora, aspectos sobre los cuales se determinará si eventualmente configuraron una nulidad por vicios en el consentimiento de la actora, de lo cual es propio decir que la base fáctica y jurídica ha sido plenamente discutida y conocida por las partes, así como la sentencia dictada por el A quo (folios 112 y siguientes), razón por la cual, al interponerse y sustentarse debidamente el recurso de apelación por la parte demandante, procede esta sala a desatarlo.

La sentencia de primera instancia absolvió a las entidades demandadas de la pretensa nulidad del traslado y del reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la asegurada, decisión que fue recurrida en alzada por el apoderado de la demandante, quien mostró su inconformismo con la totalidad del fallo de primera

instancia y la absolución de lo pretendido, para lo cual argumentó que es evidente el error al cual fue inducida la Señora Hoyos Alzate por parte de PORVENIR S.A., ya que era necesario que en el proceso de traslado, dicha entidad le hubiere dado la suficiente ilustración e información a la asegurada a fin de que valorara las consecuencias adversas a las cuales se vería abocada al hacer ese traslado y que la misma fuera sustentada técnica, económica y jurídicamente, de manera diligente por parte del fondo, a fin de que la señora Hoyos Alzate tomara la decisión correspondiente, conociendo las consecuencias que le acarrearía el hecho del traslado de COLPENSIONES al RAIS, consistentes en la pérdida del régimen de transición y el recibir a futuro una pensión bastante deficitaria, con respecto a la que le correspondería de no haberse trasladado. Aclaró que, si bien la actora es una profesional, no es abogada, ya que es ingeniera industrial, por lo que no es experta en pensiones, no conoce el tema, circunstancia que justifica aún más una completa información que debió habersele dado.

Adujo que la defensa que ejerció en primera instancia el fondo privado demandado, se limitó al aporte de un formulario que contiene la firma de la asegurada, aceptando el traslado.

Al efecto citó jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que destacó lo dicho en la misma, en el sentido de que, en un proceso de traslado a un fondo privado, es necesario que dicho fondo suministre una completa información sobre las reales implicaciones y consecuencias futuras que le acarrearía a la asegurada dejar el anterior régimen.

Considera que hubo inducción al error, al no habersele suministrado una proyección de lo que podría suceder cuando tuviera derecho a la pensión, ya que nada se aportó al proceso de inducción de traslado; que lo único que se le manifestó fue que el Seguro Social se iba a acabar y que se podría perder su pensión. Es allí donde precisamente considera que existió una fuerza irresistible, de la que habla el Código Civil.

Esta Sala toma en forma específica, sobre la base de su competencia, los temas relacionados en la impugnación.

La sentencia apelada debe **REVOCARSE**, y en su lugar **DECLARAR** que existió una inducción al error a la demandante por parte de PORVENIR S.A., configurándose una nulidad en la afiliación a dicho fondo, lo cual trae aparejado el hecho de que las cosas vuelvan al estado anterior, sin que haya existido solución de continuidad en su afiliación y aportes a COLPENSIONES, entidad que deberá pagarle la pensión por vejez, por las siguientes razones:

Esta Sala de Decisión desatará la alzada, partiendo del presupuesto según el cual no existen condiciones de preferencia o de jerarquía o importancia entre los regímenes pensionales de ahorro individual con solidaridad y de prima media con prestación definida, ni asumiendo que uno sea mejor que otro, ya que conforme al artículo 12 de la Ley 100 de 1993, “el Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber, régimen solidario de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad”; los cuales, como estructuras pensionales de reparto y de ahorro pensional, se encuentran regidos por los mismos principios, conforme al artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Es por ello por lo cual, todo el análisis se circunscribirá a establecer la

pretensa nulidad derivada de la inducción al error en que se dice que incurrió PORVENIR S.A. para que se materializara el traslado.

Debe decirse inicialmente que se está hablando de la ocurrencia de un error que ocurrió en el año 2000, es decir 14 años atrás; lo cual, de suyo delimita el tema probatorio, en la medida en que, no se entiende porque solo después de haber transcurrido el tiempo, considera la actora que se la hizo incurrir en un error.

El error que alega la parte recurrente se encuentra relacionado con el desconocimiento de la Ley. Es decir, que es posible (desde donde se lo pueda considerar), que eventualmente la actora haya incurrido en un error al escoger el FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A., precisando que dependiendo de la modalidad de sistema de fondo que quisiera escoger y según sus calidades personales de ingreso y de monto de asignaciones salariales, es que puede hablarse eventualmente de un error al escoger sea ya el régimen de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, es importante destacar que ese error que eventualmente pudo existir, bien pudo evitarse, ya que era totalmente excusable bajo la generalidad y promulgación de la ley.

El artículo 1509 del Código Civil establece respecto a este error:

**“Artículo 1509.- Error sobre un punto de derecho.** El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Y, es que es evidente su excusabilidad.

Ahora, el artículo 1513 del CC por su parte regula la fuerza. Teniendo en cuenta que el recurrente sustenta la alzada indicando que la actora se vio enfrentada a una fuerza irresistible, debe decirse que la disposición en cita establece que “la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio”.

Quiere ello decir que, por más agresiva que hubiere sido la oferta del fondo privado, esa conducta se enmarcaba dentro de la dinámica comercial que en el marco de la competencia y la actividad mercantil desarrollan las empresas. A la actora no le era inexorable su afiliación a PORVENIR S.A., por más que se le hubiere vendido la idea de que ese régimen le era más favorable.

Partiendo de las consecuencias que la parte actora considera que le fueron desfavorables al trasladarse de régimen, cuales fueron la pérdida del régimen de transición y el entrar a disfrutar de una pensión inferior a la que hubiere recibido, de permanecer en el régimen de prima media con prestación definida, debe decirse que ello, bajo el criterio que alega la parte demandante, pudo evitarse.

Respecto a lo primero, a la pérdida del régimen de transición, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece en su inciso 5º:

“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual

con solidaridad, caso en el cual se sujetaran a todas las condiciones previstas para dicho régimen”.

Esta disposición no se encuentra elaborada para abogados, se trata de una ley producto de la potestad legislativa configurativa del legislador para regular los requisitos y condiciones para acceder al derecho pensional. Por más que el recurrente indique que si bien la actora es una profesional, no era abogada y que en tal sentido no podía desentrañar estas consecuencias, se trata de un argumento que va en contra de los efectos de la publicidad y generalidad con que la ley es promulgada. Bien pudo haberse asesorado, haber consultado otro punto de vista y haber tomado una decisión con la suficiente información acerca de lo que más le convenía.

En cuanto a lo segundo, referido a que, de haber permanecido en el régimen de prima media con prestación definida, le hubiere correspondido el pago de una pensión superior, eso es relativo. En primer término, hay que decir que eso no se sabe, ya que para alcanzar a adquirir una pensión bajo el régimen en el que actualmente se encuentra, le hace falta una mayor densidad de cotizaciones, respecto de las cuales no se sabe cuál sería el monto de los ingresos base de cotización sobre los cuales se cotizara, es decir, se trata de un hecho futuro e incierto.

Aunado a ello, a muchas personas les interesa el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad porque, al ser un régimen de ahorro, lo cual puede resultar atractivo para alguien que devenga un salario considerablemente superior, les reportaría una mejor posibilidad de reunir rápidamente el capital necesario para pensionarse, y de esa manera acceder más rápidamente al derecho a la pensión. A otros, por el contrario, les puede parecer un régimen poco atractivo, dado el bajo monto de sus ingresos. En el caso de autos, si se observan las historias laborales de la actora, visibles a folios 17 y siguientes del expediente, puede advertirse que ha tenido salarios considerablemente altos, por lo que su permanencia en el régimen de ahorro individual con solidaridad puede no serle desfavorable.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en variada jurisprudencia ha sido reiterativa en que existe un deber de información a cargo de la entidad que ofrece la nueva alternativa de régimen de afiliación, en este caso PORVENIR S.A.; sin embargo ese deber de información no se excluye con la seriedad y suficiencia con la que también debe obrar el asegurado, al asistirse de un grado de diligencia cabal; grado de suficiencia e información, que para el caso en concreto, es incluso la misma ley la que se lo suministra, pudiendo indagar a cabalidad sobre los aspectos que rodean dicho traslado y así poder tomar una decisión seria y responsable de lo que más le convenga.

No puede perderse de vista que el fondo privado se encuentra en el marco de una oferta comercial legítima; en tanto no está ofreciendo un producto, o mejor, servicio público de la seguridad social que sea ilegal o que contraría los postulados constitucionales de irrenunciabilidad, servicio público y garantía a los riesgos, establecidos en el artículo 48 superior.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existen fundamentos de hecho o de derecho suficientes que permitan declarar la ineficacia o nulidad de traslado pretendida por el demandante en el libelo de la demanda, y no basta la simple afirmación de “no haber recibido una debida información” al momento de realizarse el traslado.

Es por eso que, la eventual afiliación del demandante al RPM y el traslado de los aportes al régimen en mención, depende de la decisión judicial favorable que previamente obtenga la parte actora respecto de la pretensión de la declaratoria de nulidad de la afiliación del RAIS.

Finalmente, es importante tener en cuenta que, el acto de afiliación al RAIS lo realizó la parte actora en forma libre y voluntaria y cumpliendo con los requisitos legales, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, además la carga de la prueba radica en cabeza de la parte actora, y COLPENSIONES por vía de jurisprudencia no puede otorgar Prestaciones económicas que no estén expresamente consagradas en la ley, razón por la cual negó el traslado en sede administrativa.

### **SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE RETROTRAER EL ESTADO MISMO DE LAS COSAS:**

La sentencia **SL373-2021 del 10 de febrero de 2021** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en exposición de la Magistrada Ponente **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, deja de forma clara los casos excepcionales en las cuales no se puede reconocer la ineficacia de la afiliación o traslado sobre el siguiente criterio:

“(…)

Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta

temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.

Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiendan los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

(...)"

### AL CASO CONCRETO:

Frente al caso que nos ocupa, se encuentra que la actora LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA CC 88137009, nació el 21 de junio de 1955, teniendo actualmente a la fecha 67 años de edad cumplidos, indicando haber cotizado inicialmente al RPMPD como cotizaciones para riesgos del IVM, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, manifestando contar con más de 1800 semanas cotizadas, posteriormente, al RAIS el 01 de noviembre de 1995, fue trasladado al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL de PROTECCIÓN S.A., y el 15 de enero de 1998 fue trasladado al FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A. encontrándose en la historia laboral consolidada un total de 52.1 semanas cotizadas en otras administradoras y 1227.5 semanas en PORVENIR para un total de 1280 semanas cotizadas a la AFP del RAIS; ahora, en este proceso pretende que se declare la NULIDAD E INEFICACIA DEL TRASLADO que realizó del RPMPD, argumentando

que los Fondos Privados, no le suministró la información suficiente, clara, precisa, las ventajas y desventajas de los dos sistemas de pensiones, ni las explicaciones necesarias, para la toma de una decisión tan importante que incidiría directamente con su derecho fundamental a la pensión y por ende con su mínimo vital, haciendo incurrir en error a la demandante al tomar la decisión de trasladarse.

En los hechos expuestos por la parte actora, referente a la falta de información suministrada por las AFP a la que ha pertenecido, pero no se puede demostrar la falta de error e información suministrada por la AFP del RAIS, toda vez que no aporta la documentación al proceso, pues nada le consta, por lo tanto, es un litigio que se debe superar por las partes en sede judicial sin perjuicio de la entidad a la que represento.

Como consecuencia de ello pretende que se ordene el reconocimiento como elección a la RPMPD de COLPENSIONES y no a la AFP PORVENIR S.A., solicitando conservar su afiliación al régimen de prima media administrado hoy por LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Revisando y analizando los hechos y fundamentos de la demanda, se encuentra que no es procedente el traslado de régimen pensional, por cuanto la parte demandante realizó su traslado de régimen de manera voluntaria y autónoma desde la libertad que le otorga la ley, sin que en dicho acto jurídico haya intervenido COLPENSIONES al suministrar información.

En los hechos expuestos por la parte actora, referente a la falta de información suministrada por las AFP a la que ha pertenecido, nada puede aportarse por parte de esta entidad, pues nada le consta, por lo tanto, es un litigio que se debe superar por las partes en sede judicial sin perjuicio de la entidad a la que represento.

Al hablar de la total validez del traslado efectuado, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES se cobija bajo el derecho a la libre elección de régimen que le asiste a la parte demandante y que se encuentra consagrado en el artículo 13, literal B de la Ley 100 de 1993, puesto que se debe probar que el traslado se efectuó, bajo algún vicio del consentimiento del demandante.

En cuanto a los requisitos de procedibilidad la parte demandante se encuentra analizando el expediente que realiza reclamación administrativa ante Colpensiones, el día 2 de octubre de 2015 en donde solicito el traslado del régimen de Ahorro individual con solidaridad al Régimen de prima media con prestación definida, obteniendo respuesta el mes de octubre 2 de 2015 en el cual le indican que: "la AFP a la que se encuentra afiliado el ciudadano... la aprobación o rechazo del traslado lo determina dicha entidad y es esta quien debe comunicarle la decisión adoptada"

Posteriormente en el mes de noviembre 19 de 2015, Colpensiones informa al demandante, que la AFP en la cual figura registrado no acepta su traslado.

El señor Francisco Javier Lozano Mendoza solicita ante Protección el traslado de régimen, recibiendo respuesta dirigida a su apoderado, el doctor Juan Carlos Numa, fechada junio 23 de 2018 en la cual le manifiestan que procederán a las validaciones respectivas a fin de determinar si es procedente el traslado; Posteriormente, se insiste ante Protección en la solicitud de traslado de régimen, obteniendo respuesta

el 4 de septiembre de 2019, indicando que no es posible efectuar traslado de régimen.

De manera personal, el demandante continúa solicitando traslado de régimen en el mes de marzo 9 de 2020 de Colpensiones, entidad que responde en la misma fecha, informándole que la AFP a la que se encuentra afiliado es quien determina la aprobación o rechazo del traslado y debe comunicarle la decisión adoptada.

En noviembre 6 de 2020 nuevamente solicita ante Colpensiones el traslado de régimen y Colpensiones, contesta el 8 de noviembre 10 de 2020 y en esta oportunidad le manifiestan que no es posible acceder a la misma.

Además de lo antedicho, se encuentra que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se estaría actuando en contravía de los preceptos legales establecidos por el legislador para el caso que nos ocupa; más precisamente, en contra de lo consagrado en el Artículo 13, literal E de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, el cual prescribe: “(...) *el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*”.

En el presente caso no es posible aceptar el traslado de la demandante, en virtud a la norma antes transcrita, ya que el demandante cumple con la edad para pensionarse, motivo por el cual no es posible para COLPENSIONES acceder a la solicitud de traslado.

En el evento de que se considere que existió las causales para la ineficacia o nulidad del traslado, solicito y reitero que se revise el estado actual del afiliado y si se encuentra en condición de pensionado toda vez que, ya supero la edad establecida para obtener la pensión de jubilación, puesto que no se puede retrotraer el estado mismo de las cosas por haber un hecho consumado, y es, el que el afiliado ya se encuentra con la condición de pensionado, esto implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía.

Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requeriría la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiendan los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado.

Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono que a su vez inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

Por lo que invoco esta excepción en razón de que no se puede retrotraer el estado mismo de las cosas al haberse consumado el hecho por el afiliado al haberse acreditado el estado de pensionado, esto en virtud a la sentencia **SL373-2021 del 10 de febrero de 2021** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en exposición de la Magistrada Ponente **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, deja de forma clara los casos excepcionales en las cuales no se puede reconocer la ineficacia de la afiliación o traslado.

Es de destacar también sobre este proceso, respecto que, el reconocer la nulidad o ineficacia del traslado solicitada y trasladar la totalidad de los aportes a Colpensiones, atenta de igual forma contra la estabilidad del sistema pensional colombiano administrado por esta, pues al permitírsele dicho traslado al demandante después de vencida la oportunidad legal para ello (esto es, los 10 años), transgrede la finalidad constitucional del término establecido en la precitada norma.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existen fundamentos de hecho o de derecho suficientes que permitan declarar la ineficacia o nulidad de traslado pretendida por el demandante en el libelo de la demanda, y no basta la simple afirmación de “no haber recibido una debida información” al momento de realizarse el traslado.

Es por eso que, la eventual afiliación del demandante al RPM y el traslado de los aportes al régimen en mención, depende de la decisión judicial favorable que previamente obtenga la parte actora respecto de la pretensión de la declaratoria de nulidad de la afiliación del RAIS.

Finalmente, es importante tener en cuenta que, el acto de afiliación al RAIS lo realizó la parte actora en forma libre y voluntaria y cumpliendo con los requisitos legales, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, además la carga de la prueba radica en cabeza de la parte actora, y COLPENSIONES por vía de jurisprudencia no puede otorgar Prestaciones económicas que no estén expresamente consagradas en la ley, razón por la cual negó el traslado en sede administrativa.

En conclusión, si la calidad del afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR se encuentra en validez y ya posee la condición de pensionado no puede prosperar la ineficacia de la afiliación, toda vez que, no se puede retrotraer el estado mismo de las cosas por haber un hecho consumado, y es, el que el afiliado ya cuenta con la condición de pensionado, y esto implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiendan los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono que a su vez inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

## EXCEPCIONES DE MERITO O DE FONDO

Interpongo en contra de las pretensiones de la demanda las siguientes excepciones de fondo:

### I. BUENA FE:

El Instituto de Seguros Social I.S.S. hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones -COLPENSIONES-, entidad que represento, en desarrollo de sus actos, se desempeña dentro de los parámetros legales, siendo responsable y procediendo con lealtad. Las decisiones son producto del estudio adecuado llevado a cabo por funcionarios idóneos.

Es importante resaltar que la buena fe en la labor misional de COLPENSIONES, surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho.

Al respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido reconocido por la jurisprudencia Colombina especialmente desde 1935, citándose la Jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el artículo 1603 del Código Civil Colombiano:

“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, si no a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por Ley pertenecen a ella”. Norma que tiene su correspondencia en numerosos artículos del Código Civil y que en la década del treinta también tendrá en Colombia importante tratamiento doctrinal: “De ahí que se hable de la buena fe como de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones, gracias al cual el Juez puede sacar triunfante la equidad sobre rigores del formalismo”. “El principio de buena fe es también principio del derecho laboral ha sido incluido en el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del Trabajo: “El principio de buena fe, que no es nuevo si no que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos, incluido el trabajo”. Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe si no la mala fe, en los siguientes términos:”

“La mala fe- ha dicho la Corte Suprema de Justicia- debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con bona fide, como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz que mostrara un aprovechamiento inhonesto des estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de cada caso”.

## **II. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR.**

Fundamento esta excepción en el hecho de no estar obligado COLPENSIONES, al pago de esta prestación económica. Lo anterior teniendo en cuenta que la accionante no le ha sido reconocido, **LA NULIDAD DE TRASLADO** toda vez que como lo he manifestado en el presente escrito de contestación de demanda, el demandante siempre fue libre de retirarse inicialmente de Colpensiones (régimen de prima media con prestación definida) y al afiliarse al RAIS y devolverse a COLPENSIONES, con las consecuencias que tenía el traslado y de acuerdo a la normatividad vigente.

Por tanto, COLPENSIONES ha expresado con fundadas razones que la prestación económica que no fue reconocida y fue decidida conforme a derecho, por lo cual no existe razón fáctica ni jurídica para que se esté recamando un derecho del cual el demandante no es acreedor, solicito por lo tanto al señor juez declare probada esta excepción.

## **III. COBRO DE LO NO DEBIDO POR FALTA DE PRESUPUESTOS LEGALES PARA SU RECLAMACION**

COLPENSIONES, ha expresado con fundadas razones que la prestación económica no reconocida fue decidida conforme a derecho, por lo cual no existe razón fáctica ni jurídica para que se esté reclamando un derecho del cual el demandante no es acreedor.

## **IV. LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**

Las resoluciones proferidas por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** mediante los cuales se resolvieron negativamente la **SOLICITUD DE NULIDAD DE TRASLADO**, elevadas por la actora, se encuentran amparadas con presunción de legalidad, por cuanto los actos administrativos han sido debidamente motivados con base a la documentación e información que obra en la entidad respecto al accionante, además con base en la normativa vigente para el caso en concreto y los distintos pronunciamientos jurisprudenciales aplicables.

Por lo anterior, al gozar los actos administrativos de presunción de legalidad, la carga de la prueba radica en cabeza de la parte demandante.

## **V. INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES, EN CASOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN**

La ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un

mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

## **VI. INOPONIBILIDAD POR SER TERCERO DE BUENA FE.**

En razón de lo expuesto en la excepción anterior, solicito que se tenga en cuenta que la consecuencia presentada sobre la ineficacia o nulidad del traslado es inoponible frente a tercero de buena fe en el caso de mi representado COLPENSIONES, toda vez que, a la luz de la existencia del traslado de la afiliación al RAIS es válido y cualquier afectación en la validez del traslado presenta un detrimento patrimonial de la reserva pensional RPM en caso de que resultase oponible la ineficacia del traslado al RAIS.

Ciertamente en caso de invalidarse el traslado de la misma tampoco puede condenársele a COLPENSIONES en costas e intereses moratorios en razón de que en esta relación jurídica no ha actuado en el hecho ni emitió acto administrativo alguno declarando la nulidad o ineficacia del traslado y cuyas decisiones se resguardan en relación a conductas desplegadas por terceros ajenas a la Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

## **VII. RESPONSABILIDAD SUI GENERIS DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

Resulta también relevante indicar, que las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social. En este caso, la responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del RPM que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operancia de la inoponibilidad.

## VIII. SUGERIR UN JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y PONDERACIÓN.

Toda vez que la decisión judicial de declarar la ineficacia de traslado, repercute, en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación (con efectos patrimoniales) en cabeza de COLPENSIONES, quien administra los aportes de miles de pensionados y afiliados, y dicha medida para restablecer los derechos del afiliado, no pasaría el segundo criterio de la “necesidad”, toda vez que si existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado, y es que quien se deba hacer cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la ineficacia sea la AFP, quien ha administrado dichos recursos y ha generado los respectivos rendimientos, así mismo, al ponderar los bienes jurídicos en tensión, se podría demostrar que poner en cabeza de COLPENSIONES dicha responsabilidad, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema, evaluando diferentes variables, tales como:

(i) Que COLPENSIONES es la única administradora del RPM, que alberga un mayor número de pensionados cuyas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado, de forma tal, que se estaría solventado con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por particulares (AFP).

Así pues, en caso de no aceptarse la tesis de la inoponibilidad, se debe evaluar por los jueces la proporcionalidad de la medida que se adopta con la ineficacia del traslado, y ponderar los bienes jurídicos en tensión, para adoptar otra medida, consistente en que sea la AFP quien asuma las cargas económica, o que los dineros que se trasladen al RAIS, los devuelva conforme a un estudio actuarial que determine que con ellos se cubre en su integridad la prestación en los términos actuariales previstos para el RPM.

(ii) Se pone en riesgo el derecho a la seguridad social de un mayor número de afiliados y pensionados.

## IX. IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS

Evidenciado en el hecho, de que su accionar jurídico administrativo se debe presumir de BUENA FE, a menos que se demuestre lo contrario, lo que conlleva a solicitar consecuentemente la imposibilidad de condenar en costas por lo siguiente: el Art. 55 de la ley 446 de 1998, que modificó el Art. 177 del Código Contencioso Administrativo, que a su vez remitía al Art. 392 del CPC., que de otro lado es también aplicable al procedimiento laboral por analogía del Art. 145 del CPL. Faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida, pero en consideración A LA CONDUCTA ASUMIDA por ella, que es una norma de carácter procesal de vigencia inmediata según Art. 40 de la ley 153 de 1887, en esos términos se ha pronunciado el Consejo de estado en sentencia del expediente 10918 de 1999 con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque que a su vez cita otra sentencia del mismo ponente radicado 10775 y en la cual manifestó:

*Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo de quien están las costas del proceso y,*

*por lo tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora.*

De otro lado, la sala laboral de la corte con magistrado ponente: DR. GERMAN G. VALDES en sentencia del expediente: 12736 del año 2000 y más conocida por ser la que cambió la jurisprudencia de la indexación de la primera mesada pensional, claramente se nota que prohija la tesis de la conducta asumida, y no el “pierde y paga” por cuanto dispuso:

*No se condenará en costas al actor ni en el recurso extraordinario ni en las instancias, lo primero porque el recurso extraordinario no fue originado por él y lo segundo por ser esta decisión el resultado de una modificación de la jurisprudencia que sirvió de fundamento a las pretensiones de la demanda.*

Así las cosas, no tiene soporte una condena por este hecho, pues la entidad ha obrado de buena fe, y esta actúa según lo ordena la característica filosófica de sus funciones, y no puede ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos, como en caso concreto de este proceso.

## **X. PRESCRIPCIÓN:**

De conformidad con el artículo 488 del C. S. T, en armonía con el artículo 151 del C.P.L., se establece que el transcurso del tiempo, en tres (3) años, hace que opere el fenómeno jurídico de la prescripción sobre lo demandado.

La que debe afectar todas y cada una de las reclamaciones formuladas, contando los tres (3) años de que habla la ley, desde el momento de la notificación de la demanda hacia atrás, sin que esto signifique reconocimiento derecho alguno.

## **XI. IMPOSIBILIDAD DE VOLVER AL ESTADO MISMO DE LAS COSAS Y HECHO CONSUMADO:**

En el evento de que se considere que existió las causales para la ineficacia o nulidad del traslado, solicito señor juez que se revise el estado actual del afiliado y si se encuentra en condición de pensionado toda vez que, no se puede retrotraer el estado mismo de las cosas por haber un hecho consumado, y es, el que el afiliado ya cuenta con la condición de pensionado, y esto implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía.

Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiendan los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono que a su vez inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

Por lo cual señor juez invoco esta excepción en razón de que no se puede retrotraer el estado mismo de las cosas al haberse consumado el hecho por el afiliado al haberse acreditado el estado de pensionado.

## **XII. INOMINADA O GENERICA:**

Adicionalmente, solicito al despacho que, si llegare a encontrar probados hechos que constituyan una excepción, esta sea declarada de oficio a favor de mi representada COLPENSIONES.

Por todo lo anteriormente referido, solicito al despacho se sirva declarar probadas las excepciones propuestas y en su lugar absolver a mí representada por todo cargo, y en su defecto condenar en costas a la demandante.

## **PRUEBAS**

Para demostrar los fundamentos y razones de esta contestación de demanda, así como de las excepciones propuestas, solicito respetuosamente, señor juez, sean admitidas y se ordene la práctica de los siguientes medios de prueba:

### **DOCUMENTOS QUE DEBEN SER APORTADOS CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PARA EL DECRETO DE PRUEBAS:**

- Expediente administrativo del demandante.
- Historia laboral del demandante.

- **INTERROGATORIO DE PARTE:**

El cual formularé al demandante **LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA CC 88137009**, en la audiencia de trámite y juzgamiento en la fecha y hora que decida el señor juez, igualmente me reservo el derecho de contrainterrogatorio que decrete el señor Juez en la etapa pertinente.

- **A LA AFP PROTECCION S.A:**

Solicito señor juez que se llame de manera oficiosa, o por solicitud de parte al representante legal o quien haga sus veces de **LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CENSATÍAS PROTECCIÓN S.A.**, para que, en la audiencia de trámite y juzgamiento, en la fecha y hora que decida el señor juez, para que se rinda interrogatorio de parte e igualmente me reservo el derecho de contrainterrogatorio que decrete el señor Juez en la etapa pertinente, para buscar certificar los siguiente:

i) Si el demandante ostenta la calidad de pensionado en dicho régimen privado, o si ya cumplió los requisitos que le otorgan el estatus pensionado pese a no encontrarse percibiendo aún la pensión.

ii) Cuáles fueron todas las operaciones y contratos financieros que se celebraron y ejecutaron con terceros para consolidar el soporte financiero del pensionado, y se alleguen los respectivos soportes que lo acreditan.

iii) Se certifique y allegue los soportes atinentes al trámite de emisión y expedición de bonos pensionales en el caso del demandante.

- **A LA AFP PORVENIR S.A:**

Solicito señor juez que se llame de manera oficiosa, o por solicitud de parte al representante legal o quien haga sus veces de **LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CENSATÍAS PORVENIR S.A.**, para que, en la audiencia de trámite y juzgamiento, en la fecha y hora que decida el señor juez, para que se rinda interrogatorio de parte e igualmente me reserve el derecho de conainterrogatorio que decreta el señor Juez en la etapa pertinente, para buscar certificar los siguiente:

i) Si el demandante ostenta la calidad de pensionado en dicho régimen privado, o si ya cumplió los requisitos que le otorgan el estatus pensionado pese a no encontrarse percibiendo aún la pensión.

ii) Cuáles fueron todas las operaciones y contratos financieros que se celebraron y ejecutaron con terceros para consolidar el soporte financiero del pensionado, y se alleguen los respectivos soportes que lo acreditan.

iii) Se certifique y allegue los soportes atinentes al trámite de emisión y expedición de bonos pensionales en el caso del demandante.

## ANEXOS

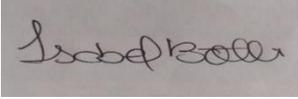
Presento al Despacho la siguiente relación de documentos

- Poder para actuar debidamente otorgado.
- Certificado de la superintendencia financiera de Colombia, razón social de Colpensiones.
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del Doctor LUS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO.
- Sustitución de poder otorgado por el Doctor LUS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de la suscrita abogada.

## NOTIFICACIONES

- A la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, las notificaciones físicas pueden hacerse en la siguiente dirección: **Calle 53 No. 35/36 Edif. Andes, Bucaramanga**; Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co)
- A la suscrita apoderada en la Secretaría de su Despacho de la ciudad de Cúcuta;  
correo electrónico: [titen50@hotmail.com](mailto:titen50@hotmail.com)  
número de contacto: 3214209395

Del Señor Juez, atentamente,



**ISABEL CRISTINA BOTELLO MORA**

**C.C 60.390.346 de Cúcuta**

**TP. 282.196 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

Señores

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS  
LABORALES.**

Correo electrónico: [j01cctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01cctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**E. S. D.**

**REFERENCIA: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**Demandante: LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA.**  
**Demandados: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A., Y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE  
PENSIONES - COLPENSIONES.**  
**Rad.: 545183112001-2022-0019500**

**JAVIER SÁNCHEZ GIRALDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.282.804 expedida en Manizales, abogado portador de la Tarjeta Profesional número 285.297 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado y residente en Bogotá D.C., con correo electrónico [procesosporvenir@procederlegal.com](mailto:procesosporvenir@procederlegal.com), actuando en calidad de apoderado especial de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3 (en adelante la “Demandada”, “Porvenir”, cualquiera indistintamente) según poder debidamente otorgado, situaciones que constan en el Certificado de Existencia y Representación Legal, respetuosamente y dentro del término legal, doy respuesta a la demanda interpuesta por **LUIS ANTONIO RIZO QUINTANA** (en adelante la “parte actora”, la “parte Demandante”), en los siguientes términos:

#### **I. OPORTUNIDAD.**

Mediante auto del **23 de febrero de 2023**, se admitió la demanda de la referencia. En virtud del párrafo del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, en donde se reafirma la decisión del 20 de noviembre de 2022 del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil<sup>1</sup>, y teniendo en cuenta el término de 10 días otorgado en el auto admisorio para dar contestación a la demanda, el presente documento es **OPORTUNO**.

---

<sup>1</sup> “Lo cierto es que el auto apelado debe revocarse porque si la notificación personal, bajo la modalidad prevista en el Decreto Legislativo 806 de 2020, se considera realizada “una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos” (subraya; art 8, inc. 3), quiere decir que el día de intimación no es el último de esos dos, sino el que sigue puesto que tales días deben cumplirse verificarse o pasar completos, que es lo que significa la expresión “transcurrir”.

## II. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

### **Desconocer los efectos de la ineficacia o la nulidad, deriva en el enriquecimiento sin causa**

La solicitud de la Demandada se centra en llamar la atención del Despacho para que en su fallo, acoja la teoría de las restituciones mutuas; es decir, que tenga en cuenta que hay beneficios propios del RAIS que no deberán quedarse con la parte demandante en caso de que se ordene la nulidad o ineficacia del traslado. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que pretende la parte actora es que, mediante una ficción jurídica se entienda que jamás fue parte del RAIS y siempre permaneció en el RPM; en ese sentido, no debería beneficiarse de aspectos propios del RAIS, pues de lo contrario, el juez: (i) estará, desdibujando la naturaleza de las instituciones de la nulidad y de la ineficacia y (ii) más grave aún, estará creando un escenario de enriquecimiento sin causa para la parte demandante.

### **¿En virtud de qué presupuesto resulta predicable el enriquecimiento sin causa?**

Bajo la hipótesis de la declaratoria de la nulidad de traslado pensional, si bien la parte actora tendrá derecho eventualmente a recibir lo que aportó dentro de la relación que existió con la Demandada, esto es, sus cotizaciones, en el mismo sentido la parte demandante al pretender que no hizo parte del RAIS, correlativamente, estará en la obligación de “devolver los beneficios propios del RAIS”, esto, bajo la figura de restituciones mutuas. En caso de que el juez mediante esa ficción jurídica omita fallar en dicho sentido, estará incrementando el patrimonio de dicha parte demandante, de manera injustificada en detrimento del patrimonio de la Demandada, lo que implica un desequilibrio económico.

Lo anterior, toda vez que no todos los elementos propios de RAIS son aplicables ni se reconocen en el RPM, debido a que son fondos que se administran de una manera diferente como se verá:

RPM	RAIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los aportes de los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantizará el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas.</li> <li>- En todos los casos, el Estado garantiza el pago de las prestaciones de las cuales se benefician los afiliados al RPM.</li> </ul>	<p>Es propio del RAIS y lo diferencia del RPM, la generación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendimientos.</li> <li>- Réditos.</li> <li>- Seguros de vida e invalidez.</li> <li>- Pólizas de seguros.</li> <li>- Alianzas.</li> <li>- Aportes voluntarios.</li> <li>- Gastos de administración.</li> <li>- Comisiones.</li> </ul>

### III. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES.

Manifiesto al despacho que, en nombre de la Demandada, me opongo a todas y cada una de las pretensiones contrarias a mi representación, por cuanto carecen de manera manifiesta de todo fundamento jurídico y fáctico. Sin embargo, se da contestación frente a cada una de las pretensiones, según su numeración:

#### EN CUANTO A LAS DECLARATIVAS

1. **No me opongo.** La pretensión no está dirigida en contra de mi representada, por lo cual no me opongo, no obstante, aclaro que no existe vicio en el consentimiento ni causal de ineficacia de la afiliación a Porvenir S.A.
2. **Me opongo** y en consecuencia solicito que se rechace lo pretendido por la parte actora porque no existe una causal legal para que se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado, teniendo en cuenta que, en la afiliación realizada a Porvenir, no existe vicio en el consentimiento ni causal de ineficacia, por cuanto mi representada cumplió a cabalidad con su deber de asesoría, además se ratifica con la suscripción del formulario de afiliación en el cual expresa constancia de haber adoptado la determinación de vincularse de manera libre, voluntaria y sin presiones.

#### EN CUANTO A LAS CONDENATORIAS

3. **Me opongo.** Como se mencionó anteriormente, en el improbable caso que se determine que hay lugar a la declaratoria de nulidad o de ineficacia del traslado, habría lugar al traslado de los aportes realizados a Porvenir, pero no habría lugar al traslado de gastos de administración, comisiones, seguros previsionales, entre otros, puesto que estos valores han sido utilizados para generar los rendimientos y prestar los servicios a la parte actora. Acceder a esta pretensión estaría generando un enriquecimiento sin causa en favor de la parte demandante, tal y como se expondrá más adelante.
4. **No me opongo.** La pretensión no está dirigida en contra de mi representada, por lo cual no me opongo, no obstante, aclaro que no existe vicio en el consentimiento ni causal de ineficacia de la afiliación.
5. **No me opongo.** La pretensión no está dirigida en contra de mi representada, no obstante, aclaro que no existe vicio en el consentimiento ni causal de ineficacia de la afiliación a Porvenir S.A.

6. **Me opongo**, toda vez que, en contra de mi representada, conforme a lo manifestado en la contestación de los hechos y con fundamento en las excepciones propuestas, no hay lugar a condena alguna.
7. **Me opongo** a la pretensión de la condena en costas, agencias en derechos y gastos del proceso que presenta la parte actora, en virtud de lo que se demostrará y fundamentará en las excepciones. Se resalta que la Demandada se está limitando a ejercer su derecho de defensa, sin ánimo ninguno de dilatar o torpedear el presente asunto.

#### IV. EN CUANTO A LOS HECHOS

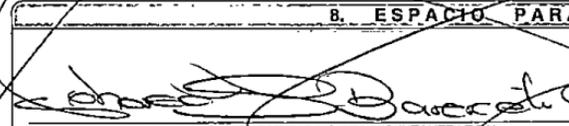
De conformidad con lo establecido en artículo 25 del C.P.T y de la S.S. y de acuerdo con la numeración expuesta en la demanda, respondemos a cada uno de los hechos de esta, en la siguiente forma:

1. **Es cierta.** Mi representada partiendo del principio de buena fe, asume que es cierta la fecha de nacimiento de la parte demandante, conforme obra en las pruebas documentales.
2. **No me consta.** A mi representada no le consta el periodo de cotización en el régimen de prima media con prestación definida, no obstante, aclaro que dentro del expediente obra prueba de que la parte accionante se vinculó con la AFP Porvenir S.A. en el año 1998.
3. **No es cierto** por cuanto una vez verificada la historia laboral consolidada reportada para la fecha de contestación de esta demanda se observa un número de semanas diferente a las reportadas por el actor bajo este numeral, no obstante, aclaro que, al tratarse de semanas cotizadas en entidades ajenas a mi representada, no es posible para Porvenir S.A. acreditar su veracidad y/o exactitud.
4. **No me consta.** a mi representada no le consta la fecha en la que la parte demandante se trasladó al RAIS, toda vez que dicha afiliación no se dio en Porvenir S.A.
5. **Es cierto** la fecha de afiliación de la parte demandante fue realizada en enero del año 1998, y la fecha efectiva de afiliación se dio el 01 de abril del mismo año.
6. **No me consta** Porvenir no participo en ese hecho.
7. **No es cierto** que el traslado de régimen haya sido a Porvenir S.A. en el año 1995 toda vez que la afiliación a Porvenir S.A se dio en el año 1998, y aclaro que la manifestación hecha es

una apreciación subjetiva que no comporta un hecho, razón por la cual me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

8. **No me consta** Porvenir no participo en ese hecho.
  
9. **No es cierto** que la vinculación a la AFP porvenir S.A se haya dado sin la suficiente información, puesto que como es de entenderse, luego de varios traslados entre diferentes AFP, se puede concluir que a la parte actora se le informaron los requisitos y los diferentes aspectos que se tendrían en cuenta para adquirir pensión dentro del RAIS, los beneficios del régimen dentro de los que se encuentran la posibilidad de los herederos de disponer del capital en caso de que el afiliado muera y no haya accedido a su pensión, las posibilidades de pensión mínima y sus requisitos, los rendimientos y los diferentes escenarios de estos, la destinación y uso de los aportes, los descuentos mensuales para gastos de administración los cuales se verían reflejados en los rendimientos que sus aportes generaran, la protección y pago de la prima de un seguro de vida e incapacidad, todo lo anterior, de conformidad con la Ley 100 de 1993, quedando claro que mi representada siempre ha obrado bajo los valores de integridad, diligencia y prudencia facilitando el acceso a la información de nuestros afiliados sin ninguna clase de engaño o inducción a error, se entiende que la parte demandante al firmar el formulario de afiliación entendió y aceptó las diferentes características y beneficios dentro del RAIS.
  
10. **No es cierto** que la vinculación a la AFP Horizonte hoy porvenir S.A se haya dado sin la suficiente información, puesto que como es de entenderse, luego de varios traslados entre diferentes AFP, se puede concluir que a la parte actora se le informaron los requisitos y los diferentes aspectos que se tendrían en cuenta para adquirir pensión dentro del RAIS, los beneficios del régimen dentro de los que se encuentran la posibilidad de los herederos de disponer del capital en caso de que el afiliado muera y no haya accedido a su pensión, las posibilidades de pensión mínima y sus requisitos, los rendimientos y los diferentes escenarios de estos, la destinación y uso de los aportes, los descuentos mensuales para gastos de administración los cuales se verían reflejados en los rendimientos que sus aportes generaran, la protección y pago de la prima de un seguro de vida e incapacidad, todo lo anterior, de conformidad con la Ley 100 de 1993, además de ello, el asesor cumplió su deber legal de actuar en forma diligente, pues al momento de la vinculación se le explicó en forma clara y comprensible las características del régimen al que estaba afiliado y sus diferencias respecto del RPM no solo al momento de la afiliación sino poniendo a su disposición todos los canales de atención como la página web, las oficinas de servicio, líneas de atención al cliente y aplicación móvil, constatándose así que tuvo oportunidad de consultar cualquier duda que existiera respecto a su futuro pensional sin acercarse a esta AFP, quedando claro que mi representada siempre ha obrado bajo los valores de integridad, diligencia y prudencia facilitando el acceso a la información de nuestros afiliados sin ninguna clase de engaño o

inducción a error, se entiende que la parte demandante al firmar el formulario de afiliación entendió y aceptó las diferentes características y beneficios dentro del RAIS tal como se puede observar en el formulario de afiliación que firmó voluntariamente.

LOS BENEFICIARIOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS SERAN VERIFICADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES									
<b>6. ESPACIO PARA EL EMPLEADOR</b> DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO SON LOS QUE CORRESPONDEN A LA INFORMACION QUE ME HA SIDO SUMINISTRADA.   FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR		<b>7. ESPACIO PARA EL AFILIADO</b> <b>VOLUNTAD DE SELECCION Y AFILIACION</b> HAGO CONSTAR QUE LA SELECCION DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LA HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES. MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA HORIZONTE S.A. PARA QUE ADMINISTRE MIS APORTES PENSIONALES Y QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS.   FIRMA DEL AFILIADO							
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DEL AREA DE NOMINA <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>AÑO</td> <td>MES</td> <td>DIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		AÑO	MES	DIA					
AÑO	MES	DIA							
B. ESPACIO PARA LA ADMINISTRADORA									
 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA O REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL ASESOR  NOMBRE ASESOR	CODIGO ASESOR COMERCIAL 2502021025 CODIGO OFICINA						
APELLIDOS Y NOMBRES		CODIGO ENTIDAD	CANAL						
ASESOR COMERCIAL <input type="checkbox"/>	DIRECTOR <input type="checkbox"/>	GERENTE ZONA <input type="checkbox"/>	Vo. Bo. DIRECTOR <input type="checkbox"/>						
		Vo. Bo. - 1 <input type="checkbox"/>	Vo. Bo. - 2 <input type="checkbox"/>						

**11. No es cierto** Para el año 1998 (fecha de afiliación) no era mandatorio la entrega de cálculos actuariales, matemáticos y/o proyecciones pensionales; por cuanto la remisión como tal de simulaciones pensionales a los afiliados o potenciales afiliados que los soliciten sólo es obligatoria a partir del 26 de diciembre de 2014, fecha de publicación del Decreto Reglamentario 1748 de 2014, no se pueden desconocer aquellos deberes propios de los consumidores, tales como informarse respecto a las condiciones de aquellos productos o servicios que les atañen, máxime el Sistema de Seguridad Social en pensiones así como su legislación son de conocimiento público, como se indicó anteriormente, mi representada ha puesto a disposición de la parte actora y de cada uno de sus afiliados, una red de oficinas y expertos que están atentos a solventar las dudas o inquietudes que se les presenten. Adicional a ello, es deber del afiliado solicitar o pedir aclaraciones cuando no entiende o comprende los documentos remitidos.

**12. No es cierto** al momento de la vinculación a la AFP, se cumplió con la obligación de asesorar al actor suministrando la suficiente información clara y concreta sobre los beneficios que obtendría en el régimen de ahorro individual, entre los cuales se encuentran la naturaleza propia del RAIS, beneficios, requisitos y condiciones para acceder a la pensión mínima, información completa y clara sobre las diferencias en cada uno de los regímenes (RPM y RAIS) a fin de que comprendiera las características y distinciones de cada uno de estos, como

se evidencia en el formulario de afiliación que obra en el expediente este fue suscrito de manera libre, voluntaria y sin presiones por el aquí demandante, adicionalmente, como se indicó anteriormente, mi representada ha puesto a disposición de la parte actora y de cada uno de sus afiliados, una red de oficinas y expertos que están atentos a solventar las dudas o inquietudes que se les presenten. Adicional a ello, es deber del afiliado solicitar o pedir aclaraciones cuando no entiende o comprende los documentos remitidos, por lo demás me atengo al tenor literal de la ley.

**13. No me consta** A mi representada no le consta el promedio salariales de la parte actora por lo que me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

**14. No me consta** como quiera que mi representada no conoce la proyección pensional a la que hace referencia la parte actora.

**15. No es cierto.** Lo anterior, por cuanto como se ha dejado en claro dentro de la presente contestación, Porvenir S.A, brindó una asesoría completa, clara, suficiente y veraz que le permitió a esta, tomar su decisión de afiliarse con mi representada en forma “LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES” tal y como lo dejó consignado en formulario de afiliación suscrito. En adición de lo expuesto, se observa que las gestiones que atendieron la afiliación de la parte actora fueron realizadas de conformidad con la Ley 100 de 1993 y demás normatividad aplicable, por cuanto la mentada Ley 100 al tenor de lo dispuesto en el literal b de su artículo 13 indica que la elección de uno o cualquiera de los regímenes pensionales, “Prima Media Con Prestación Definida o Ahorro Individual Con Solidaridad” es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o traslado.

Por su parte, el artículo 6° del Decreto 228 de 1995 consagra que la elección de la Entidad Administradora de Fondos De Pensiones se realiza a través del diligenciamiento del formulario por parte del afiliado frente al empleador o frente a la Administradora de Fondos De Pensiones. En virtud de ello el artículo 15 del Decreto 692 de 1994 señala que, para el caso de traslado de régimen pensional, este será realizado mediante diligenciamiento de formulario, documento que, para el presente caso, se observa suscrito por la parte actora.

Ahora bien, con respecto a la información brindada a la actora, se indica que el asesor al momento de suscribirse tal documento por la parte actora brindó asesoría personalizada y amplia a la demandante sobre todos los aspectos de este, así como de su derecho a retractarse y el término establecido para ello cumplimiento de esta manera con los requisitos y procedimientos establecidos para su validez.

**16. Es una manifestación y no comporta un hecho**, no obstante, aclaro que no existe vicio en el consentimiento ni causal de ineficacia de la afiliación.

**17. Es una apreciación y no comporta un hecho**, comporta una interpretación de la ley por tanto me atengo al tenor de la misma.

**18. Este numeral comporta varios hechos**

**18.1. Es cierto** que la parte demandante elevó un derecho de petición a mi representada solicitando el traslado de los dineros obrantes en su cuenta individual a Colpensiones, no obstante aclaro que la respuesta emitida por esta entidad se produjo en los siguientes términos ***“Le manifestamos que Porvenir S.A. procederá al traslado de la totalidad de los dineros obrantes en su cuenta individual de ahorro pensional, (aportes pensionales más rendimientos financieros) una vez la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, notifique a Porvenir S.A. sobre la reactivación de su vinculación, a través de la herramienta tecnológica, “Mantis” o el medio que esa entidad disponga para el efecto”***,

**18.2. No es cierto** que la respuesta dada por mi representada haya sido afirmativa teniendo en cuenta que dentro de dicha respuesta se puede observar que tal proceso de traslado depende de la decisión tomada por Colpensiones.

**19. No me consta** Porvenir no participo en ese hecho, por lo que me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

**20. No me consta** Porvenir no participo en ese hecho, por lo que me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

## **V. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA**

### **5.1. Fundamentos y razones de derecho.**

**5.1.1. No hay retroactividad en la norma para exigir obligaciones no existentes en el momento del traslado.**

Es de aclarar que en la actualidad se exige demostrar que hubo asesoría a la parte demandante con el cumplimiento de exigencias rigurosas más allá del diligenciamiento del formulario y la información brindada de manera verbal, esto, sin tener en cuenta que esta obligación se hizo exigible por parte de la Superintendencia Financiera, (ente que vigila a las

Administradoras del Fondo de Pensiones) a partir del año 2016 mediante Circular 016 de 2016. Sin embargo, se debe **aclarar que esta no es una fuente formal de derecho**.

No obstante, lo anterior, las posturas de la Corte Suprema de Justicia siguieron la corriente de las exigencias de la Superintendencia Financiera, pero impusieron criterios sin respetar el principio de la irretroactividad, toda vez que no deberían ser exigidos dichos requisitos para quienes se hayan afiliado /trasladado previo al año 2016, pues antes de ese tiempo, no existía la doble asesoría, buen consejo o información completa, detallada y suficiente en los términos que hoy se pretende se hubieran realizado para el momento del traslado, lo importante para el 2016, era brindar información veraz y necesaria, con el fin de que la parte actora pudiera tomar una decisión libre y voluntaria.

En concordancia con lo anterior puede verse que, con la creación del RAIS, la Ley 100 de 1993, no estableció ninguna obligación para las administradoras del sistema de pensiones en materia de suministro de información, simplemente se limitó a mencionar la garantía de elección libre y voluntaria en su artículo 13 de la Ley 100 de 1993<sup>2</sup>. En el mismo sentido, se profirieron los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, que, creando las obligaciones de las administradoras de pensiones, no mencionan la obligación de cumplir con ese deber de información, tal cual como hoy se exige.

En este sentido, cuando se pretende aplicar lo exigido en el año 2016, a los años acontecidos entre 1994 y el año 2016, simplemente se violan los principios del derecho laboral, pues se entiende que las normas que lo regulen no podrán ser retroactivas, pues en ese sentido genera escenarios de inseguridad jurídica, y eso haría el Despacho en caso de acceder a las pretensiones de la parte demandante.

### **5.1.2. Efectos de la ineficacia de un acto jurídico.**

En principio es importante dejar claro que la ineficacia de pleno derecho es diferente de la nulidad, esta última, implica que el acto genera efectos en la vida jurídica pero que por el vicio en el consentimiento (error, fuerza o dolo) en ese acto, este último debe desaparecer de la vida jurídica y se deben restituir las cosas al estado anterior. A diferencia de la nulidad, **la ineficacia se entiende como una figura que crea una ficción jurídica que implica que el acto nunca existió y por lo tanto nunca debió generar efectos en la vida jurídica** (al

---

<sup>2</sup> “b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente Ley”.

respecto, ver sentencias SL19447-2017, SL17595-2017, SL4964-2018, SL1421-2019, SL2611-2020, y SL1733-2022)<sup>3</sup>.

En consecuencia, de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, reconoce en su línea jurisprudencial reciente, que, no existe normativa civil vigente, que regule los efectos de la ineficacia y por esta razón, aunque para esta corporación es claro que la nulidad y la ineficacia son figuras distintas, reconoce que su efecto legal es retrotraer los actos generados al punto de inicio del negocio jurídico. Esto quiere decir que las partes tienen la obligación de intentar desaparecer en “esa ficción jurídica” todas sus actuaciones para que, en la realidad, se entienda que nada existió entre estas, como se ve en Sentencia SL2877 de 2020, en donde la Corte Suprema de Justicia indicó:

*“De modo que al no existir una norma explícita que regule los efectos de la ineficacia de un acto jurídico en la legislación civil, acudió al aludido precepto relativo a las consecuencias de la nulidad, el cual consagra las mismas consecuencias de aquella. Dicha disposición establece:*

*Artículo 1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita (subrayas fuera de texto).”<sup>4</sup>*

Así las cosas, es claro que, ante la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, los actos entre las Administradoras y los demandantes se deben retrotraer, lo cual tendrá como implicación que, bajo la ficción jurídica, se entienda, que entre las partes no

---

<sup>3</sup> **Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 19447 del 27 de septiembre de 2017. MP Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 17595 del 18 de octubre de 2017. MP. Dr F. Castillo Cadena.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 4964 del 14 de noviembre de 2018. MP. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL1421 del 10 de abril de 2019. MP. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL2611 del 1 de julio de 2020. MP. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 1733 del 25 de mayo de 2022. MP. Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo.

<sup>4</sup> **Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 2877 del 29 de julio de 2020. MP. Dra. Clara Cecilia Dueñas.

existió la afiliación al RAIS. Es decir, en la realidad se entenderá que el demandante siempre perteneció al RPM, lo que evitará que se causen perjuicios entre las partes.

Bajo el entendido de que las partes hacen lo posible para encontrarse en el punto inicial de la relación, en este caso, previo al traslado de régimen RPM al RAIS, estas tienen la carga de evitar el enriquecimiento sin causa mediante la devolución de bienes, dineros y objetos de los que se hayan beneficiado por los actos realizados en virtud de la relación, sobre la que se pretende la ineficacia. En el entendido de que la ineficacia retrotrae los efectos como si la relación entre las partes no hubiese existido, con estos actos deben desaparecer los beneficios de ellos obtenidos.

### **5.1.3. Restituciones mutuas.**

Como se aclaró en el punto anterior, las restituciones mutuas, son las devoluciones que realizan las partes de aquellas cosas de las que se beneficiaron en virtud de una relación que pretende ser declarada ineficaz o incluso nula, pues al reestablecer las cosas a su estado inicial, las partes no tendrían por qué hacer suyos los bienes, dineros u objetos que la otra parte “entregó” o “puso a disposición” para llevar a cabo el negocio, ya que al hacer de cuenta que el negocio “nunca existió” entre las partes, estas solo tendrían derecho a quedarse con lo que era suyo antes del traslado, esto es las cotizaciones que el afiliado realizaba al RPM y por parte de la Demandada, los gastos administrativos, financieros, rendimientos, frutos, réditos y comisiones etc. De lo contrario se estaría desconociendo el efecto legal de la ineficacia, la obligación de restituir y en su defecto se genera una situación de enriquecimiento sin causa, tal como se explica la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL2877 de 2020:

*“(…) el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el Juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, **cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.***

*“De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo*

*posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.<sup>5</sup>*

Lo anterior quiere decir, que las restituciones mutuas que se den a raíz de la ineficacia de un acto o negocio jurídico deben ser bilaterales, frente a este último punto la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en las Sentencias SL2877-2020, SL3349-2021, SL2693-2022 y SL959-2022, al mencionar:

*“(…) el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el Juez en cada caso en particular<sup>6</sup>”*

Tan de vital importancia es llevar a cabo la obligación de devolverse entre las partes lo que bajo la relación jurídica que pretende declararse ineficaz o nula se entregó, que en caso de que las partes no adelanten por su cuenta dicha obligación, el juez debe declararla de oficio, con el fin de mantener el equilibrio y dispensar justicia como lo indicó la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SC-1078 de 20187:

*“(…) declarada judicialmente la nulidad de un contrato, las partes deben ser restituidas de jure al estado anterior, y por tanto, la prestación respectiva, que conduce a que la restitución se verifique se debe también de jure, y procede en ello oficiosamente la justicia sin necesidad de demanda.”*

**Es claro con lo mencionado, que la figura más importante en este tipo de procesos de ineficacia y/o nulidad del traslado, es la de las restituciones mutuas, pues esta tiene un**

---

5 ibídem.

6 Ibídem.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021. MP. Dr. Luis Benedicto Herrera Díaz.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 2693 del 26 de julio de 2022. MP. Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota.

**Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 959 del 2 de marzo de 2022. MP. Dr. Omar Ángel Mejía Amador.

7 **Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Civil. Sentencia SL 1078 del 13 de abril de 2018. MP. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

**fin lógico que de manera orgánica se encuentra inmerso en el proceso, consistente en evitar que se quiebre el equilibrio de las relaciones y que una parte tenga ventaja sobre el patrimonio de la otra, disminuyéndolo.**

#### **5.1.4. Enriquecimiento sin causa**

El enriquecimiento sin causa es una institución orientada a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufre un detrimento en su patrimonio, mientras otro ve reflejado un incremento en el mismo, sin que exista una razón objetiva para tal alteración. Por este motivo, ante el riesgo de presentarse un enriquecimiento sin causa, las partes deben ajustar el desequilibrio que se genera, con el fin de evitar un daño o afectación a una de las partes. Así lo ha definido la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC de 19 de dic. de 2012, exp. 1999-002808 al indicar:

*“No obstante lo anterior, es decir, a pesar del tardío reconocimiento explícito de la institución, la jurisprudencia de la Corte, además de abundante, ha sido pacífica en cuanto a la ocurrencia, regulación y corrección del desequilibrio inequitativo que el enriquecimiento sin causa genera, encaminándose “a prevenirlo o corregirlo (...)”*

Ahora, esta misma corporación, en Sentencia SL3814-20209, estableció la existencia de cinco elementos que conforman la figura del enriquecimiento sin causa, como se verá a continuación:

*“1º Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no sólo en el sentido de adición de algo sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.*

*“2º Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél.*

---

**8 Corte Suprema de Justicia.** Sala de Casación Civil. Sentencia exp. 1999-00280 del 19 de diciembre de 2012. MP. Dr. Jesús Valle de Rutén Ruiz.

**9 Corte Suprema de Justicia,** Sala de Casación Civil. Sentencia SL3814 del 16 de septiembre de 2020. M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

*“Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio.*

*“El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.*

*“3º Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica. En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposición expresa de la ley”.*

Frente al tercer requisito, vale la pena aclarar, que al omitir la figura de las restituciones mutuas, el juez no solo estaría fallando en contravía de lo que significa la declaratoria de ineficacia y/o nulidad, sino que además crearía un escenario en el que permite que el afiliado regrese posiblemente al RPM con un porcentaje mayor al que debería corresponderle, teniendo en cuenta que son regímenes totalmente distintos y que lo que el RAIS pone a disposición del afiliado podrá entenderse como beneficios adicionales que no se encuentran en el RPM.

*“4º Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien carezca Radicación n.º 66071 SCLAJPT-10 V.00 32 de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. Él debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.*

*“5º La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley. El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un daño pero no el de indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado”*

En este caso, debe aclararse que como consecuencia de la nulidad o la ineficacia, el afiliado tendrá solamente derecho a que se le devuelvan las cotizaciones que de no haber realizado el traslado, hubiese continuado haciendo en el RPM. Lo anterior, porque de recibir los elementos propios del RAIS, como los rendimientos, réditos, operaciones comerciales y de inversión, portafolios de cartera, comisión por administración, estaría pasándose por alto la figura de la restitución y se estaría incrementando el patrimonio de la parte actora, afectando el de la Demandada.

## VI. **EXCEPCIONES DE MÉRITO**

### 6.1. Buena Fe.

Todas las actuaciones de Porvenir se han realizado teniendo en cuenta la voluntad de la parte demandante y sus intereses al pertenecer al régimen y al fondo, pues se han puesto todos los recursos adecuados a disposición este para lograr su cometido y es la consecución de una pensión de vejez. Los actos de Porvenir desde el inicio del litigio se exponen favoreciendo el deseo de la parte actora, y por esto se deja clara la **VOLUNTAD DE LA CONCILIACIÓN** por parte de Porvenir, bajo el respeto de la figura de las restituciones mutuas del que se ha hablado desde el principio de este escrito.

### 6.2. Ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado.

Como se mencionó en los fundamentos de derecho, no existe legalmente una definición de los efectos de la ineficacia; no obstante, por vía jurisprudencial se ha decidido que son los mismos de la declaración de la nulidad; es decir, que su objetivo es reestablecer las condiciones del negocio jurídico a su estado inicial, para el caso en concreto “a través de la ficción jurídica” hacer como si nunca hubiese existido una relación en las partes. No obstante, para que la declaratoria de la solicitud de ineficacia o nulidad sea viable, debe estar precedida de situaciones de error, fuerza, dolo, que constituyan decisiones viciadas.

Es importante frente a lo anterior, precisar que, la “omisión” de información que pueda establecer el Despacho que hubo dentro del proceso de afiliación a Porvenir, no vició el consentimiento de la parte demandante para que proceda la nulidad o ineficacia porque no ha sido demostrado que dicha decisión no fuera voluntaria, tuviera un fin calificado como doloso o indujera en error. Simplemente obedeció a situaciones que para la época no estaban reguladas, pero no por ello puede entenderse que existió una situación que afectó el consentimiento, más aún, cuando hemos expuesto que en las situaciones de índole laboral no procede la retroactividad de la norma.

Para el caso en concreto, es importante exponer que la carga de la información para el momento del traslado, como lo hemos expuesto en este documento, no era exclusiva de la Demandada

sino también de la parte actora; toda vez que se trata de una relación donde existe un deber de informarse también para el afiliado. Así las cosas, la parte demandante debió asumir la carga de enterarse del régimen al cual se trasladaba, sus particularidades, condiciones, modalidades de pensión, mecanismos de divulgación, obligaciones y derechos lo que supone actos de mediana diligencia para el consumidor y actos de atención y cuidado en la toma de decisiones, según lo establecido en el Decreto 2241 de 2021, lo cual no ha logrado demostrar la parte actora dentro del proceso.

Un acto que Porvenir considera propio para poner en práctica el fundamento anterior, es que todos los fondos del RAIS cuentan con un simulador; con este, la parte demandante pudo haber realizado la proyección de su pensión de manera autónoma, lo cual, no toma más de 10 minutos en línea, como puede verse en este enlace <https://www.porvenir.com.co/web/simuladorpensional>. Dichas ausencias, demuestran la falta de diligencia que hemos mencionado en el párrafo anterior.

Por las anteriores razones no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, siendo claro que no existió una situación precedida por error, fuerza o dolo que configuren vicios en el consentimiento, para que sea declarada la nulidad de lo actuado o la ineficacia del acto jurídico que existió entre las partes.

### **6.3. Aceptación tácita de las condiciones del RAIS.**

Es importante aclarar, sin perjuicio de lo anteriormente argumentado, que la parte actora lleva varios años afiliada al RAIS, por lo cual, con esa medida diligencia que le correspondía actuar según lo expuesto en el Decreto 2241 de 2021, puedo identificar en el régimen las condiciones, características del mismo, así como las diferencias con el RPM, las cuales incluso son de conocimiento público.

Sumado a lo anterior, debe aclararse que la parte demandante ha hecho parte de más de un fondo de pensiones perteneciente al RAIS, con lo que se puede inferir que su decisión, voluntad e interés fue siempre permanecer a dicho régimen y sería imposible declarar la nulidad o ineficacia del traslado, cuando en cada uno de los fondos la parte demandante fue informada así sea de manera verbal de las características de los mismos.

#### **¿Podría entonces entenderse que existe una situación de ausencia de buena fe de la parte actora con la presentación de la demanda, objeto de esta contestación?**

Toda vez que dicha parte tuvo la oportunidad por más de 10 años de cambiar de régimen y guardó silencio al respecto hasta ahora y solo cuando este tipo de procesos está en auge ¿pretende el cambio del mismo?

Son preguntas válidas para un juez que deberá impartir justicia y fallar a favor de quien realmente actuó contrario a la buena fe, que hasta el momento no se ha demostrado que es la Demandada

y así mismo deberá fallar garantizando además de lo mencionado el **cuidado de los recursos públicos**.

#### **6.4. Enriquecimiento sin causa derivado de la omisión de la figura de restituciones mutuas.**

Tal y como se indicó en acápites anteriores y ha sido el **punto central de la defensa**, es claro que los efectos que tiene la nulidad e ineficacia son los de restituir las condiciones al punto inicial del negocio jurídico, (es decir como si no hubiese existido el traslado al RAIS); paralelamente, las partes del negocio, tendrán la obligación de devolver todo aquello que sea propiedad de la otra parte o que esta haya puesto a disposición en la relación que mediante “ficción jurídica”, se pretende hacer ver como si nunca hubiera existido, llamándose entonces a este tipo de obligación “Restitución mutua”.

Mediante dicha figura de las restituciones mutuas, la Demandada, realiza un llamado al Despacho de atender las explicaciones que de esta figura se han hecho, y el estudio juicioso que la misma requiere.

Lo anterior, porque frente a una eventual decisión del Despacho, en donde se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS y se condene a la Demandada a devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante al RPM, advertimos que únicamente será procedente la devolución de los aportes de la cuenta de ahorro individual, pero no lo será respecto de la comisión de administración, rendimientos, réditos, seguros, y cualquier otro valor o beneficio adicional que sea únicamente aplicable en Porvenir y propio del RAIS, pues al reestablecerse las condiciones iniciales, se entendería que la Demandante siempre permaneció en el RPM y en ese sentido no sería titular de los conceptos que solo se reconocen en el RAIS.

Se pone de presente dicha situación objeto de esta excepción porque si bien, la Demandada reconoce cuales podrían ser las eventuales condenas frente a la declaratoria de nulidad o ineficacia, también entiende que en caso de que se ordene a Porvenir devolver al RPM los aportes de la parte actora y adicionalmente los rendimientos generados, lo descontado por comisión de administración, el valor de los réditos, el seguro previsional o cualquier otro concepto distinto de los aportes, **se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor del afiliado**, pues la parte demandante, estaría recibiendo unos rendimientos y beneficios generados que solo se lograron por la administración de Porvenir y que no hacen parte del funcionamiento propio del RPM (incrementando su patrimonio sin causa alguna), situación que sin duda alguna causaría un detrimento en el patrimonio de Porvenir, creando situaciones de desequilibrio, desigualdad y privilegio para una de las partes del contrato que fue declarado ineficaz.

Teniendo en cuenta los requisitos del enriquecimiento sin causa que tienen asidero en la situación en donde se pasa por alto la figura lógica de las restituciones mutuas, solicitamos al Despacho tenga en cuenta que la única orden sobre la que podrá reestablecer la justicia para las partes

será la de condenar a Porvenir a la devolución de única y exclusivamente los aportes sin conceptos adicionales.

## **VII. PRUEBAS SOLICITADAS**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165 del Código General del Proceso (en adelante el “CGP”) y siguientes, me permito solicitar señora Juez que, llegado el momento procesal oportuno, se sirva disponer la adjunción, el decreto y la práctica de las siguientes pruebas:

### **7.1. Documentales**

- 7.1.1. Historia laboral consolidada.
- 7.1.2. Relación Histórica de Movimientos. En Porvenir.
- 7.1.3. Certificación de afiliación de fecha 28 de enero de 2023.
- 7.1.4. Correspondencia recibida el 11 de junio de 2022
- 7.1.5. Comunicado del 11 de julio de 2022 emitido por porvenir
- 7.1.6. Correspondencia recibida el 12 de agosto de 2022
- 7.1.7. Comunicado del 05 de septiembre de 2022 emitido por Porvenir.
- 7.1.8. Simulación pensional de fecha 05 de septiembre de 2016.
- 7.1.9. Formulario de afiliación a Horizonte de fecha año 1998.

### **7.2. Interrogatorio de parte**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 del CGP, me permito solicitar al señor Juez que disponga la citación de la parte Demandante para llevar a cabo interrogatorio de parte. Solicito, por tanto, que se disponga la práctica de dicha prueba, en la fecha y en la hora que a bien tenga en señalar el Despacho.

## **VIII. ANEXOS.**

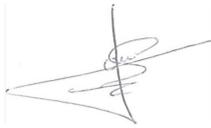
- 8.1. Escritura Pública por medio del cual se otorga poder general para ejercer representación y defensa judicial.
- 8.2. Certificado de existencia y representación legal de Porvenir S.A., expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- 8.3. Copia simple de cédula y tarjeta profesional del suscrito.

- 8.4. Certificado de existencia y representación legal de Proceder S.A.S, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
- 8.5. Los documentos señalados en el acápite de pruebas.

## IX. NOTIFICACIONES

- 9.1. El demandante en las direcciones señaladas en la demanda.
- 9.2. Mi representada en el correo electrónico: [notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co).
- 9.3. El suscrito apoderado en la Calle 67 # 7-57 Of. 601 Edificio AMIN y en el correo electrónico: [procesosporvenir@procederlegal.com](mailto:procesosporvenir@procederlegal.com) y [jsanchez@procederlegal.com](mailto:jsanchez@procederlegal.com), este último inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

De manera atenta, suscribe,



**JAVIER SÁNCHEZ GIRALDO**

C.C. No. 10.282.804 de Manizales, Caldas

T.P. 285.297 del C.S.J.

Celular: 3164330542

Correo electrónico:

[procesosporvenir@procederlegal.com](mailto:procesosporvenir@procederlegal.com) y [jsanchez@procederlegal.com](mailto:jsanchez@procederlegal.com)